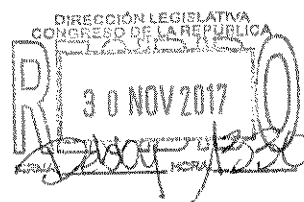


00000 / 49



Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

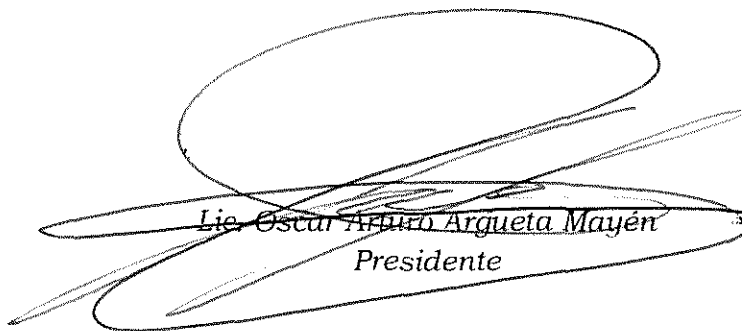
30 de noviembre de 2017
Ref. CAE 359-2017/OAAM-mp

Licenciado
Luis Eduardo López
Director Legislativo
Congreso de la República

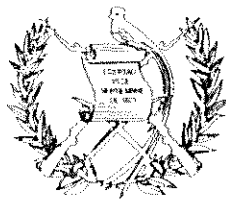
Licenciado López:

Con fundamento en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto me permito remitir Dictamen favorable, emitido por la Comisión de Asuntos Electorales, a las Iniciativas de Ley 5059 y 5158 que pretenden reformar el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, para que se sirva dar el trámite correspondiente.

Atentamente,


Lie. Oscar Arturo Argueta Mayén
Presidente





01060.50

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DICTAMEN NO.1-2017
COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES

INICIATIVAS 5059 y 5158
REFORMAS AL DECRETO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS

ANTECEDENTES

Con fechas 8 de junio y 3 de noviembre del año 2016 el pleno del Congreso de la República de Guatemala conoció las iniciativas de ley identificadas con los números 5059 y 5158 que proponen reformas al Decreto 1-85 la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. La primera iniciativa fue presentada por los diputados Roberto Ricardo Villate Villatoro, Gustavo Arnoldo Medrano Osorio y Edgar Tomás Córdova Molina. La segunda por el Organismo Ejecutivo.

Las iniciativas de marras fueron remitidas a la Comisión Específica de Asuntos Electorales, misma que fue sustituida por medio de las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, a partir de enero de 2017, por la Comisión de Asuntos Electorales.

1- JUSTIFICACIÓN

El Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, surge de la necesidad de legitimar el sistema político tras la liberalización y transición democrática¹; transitar de regímenes autoritarios hacia un sistema acorde a las

¹ En Construyendo la Democracia en Sociedades Posconflicto. Azpuru, Dinorah, et.al. se estableció un cierto consenso al proceso que, en general, partía la democracia en América Latina, en el marco de la tercera ola de la democratización identificada por Huntington. Entonces, la primera etapa es la liberalización y luego, la transición. La democratización, por su parte, conceptualizada por O'Donnell y Schmitter, establecían que las elecciones se volvían procesos permanentes, regulados por las reglas de juego establecidas en la constitución política de cada país.



1/80



01-01-151

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

exigencias que se instalaron a fines del siglo XX y que dieron origen a un nuevo orden internacional.

Para lograr lo expuesto en el párrafo anterior, era necesario que se garantizaran por medio del cuerpo normativo, los siguientes aspectos:

- Contar con un órgano independiente que administrará el proceso electoral;
- La apertura del sistema electoral al pluralismo político y;
- La legitimación de los gobiernos por medio de elecciones libres con la participación ciudadana.

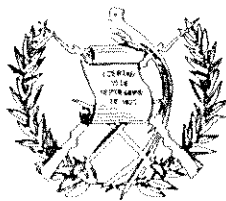
El artículo 223 de la Constitución Política de la República de Guatemala -Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas – determina la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. La Ley Electoral y de Partidos Políticos desarrolla el sistema electoral, se regula lo relativo al sufragio universal, las organizaciones políticas, los órganos electorales y el proceso electoral. Todo esto es la base del sistema democrático y del régimen político del país.

Tomando en consideración que el derecho electoral es evolutivo y debe adaptarse a las situaciones socio-jurídicas y políticas del país, las revisiones de las disposiciones contenidas en la norma deben adecuarse para que respondan a las necesidades que la sociedad y la institucionalidad presentan.

Con fecha 26 de abril de 2016, el Congreso de la República aprobó el Decreto 26-2016, reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta reforma dotó a la autoridad electoral de mayor capacidad de supervisión, control y sanción sobre los partidos políticos; quedando pendiente abordar



2/ED



0000052

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

temas que orienten la dinámica organizativa hacia mayores niveles de institucionalidad y democracia interna.

2- DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN

La Comisión de Asuntos Electorales revisó las iniciativas objeto del presente dictamen, definiendo posteriormente los objetivos que habrían de perseguirse con la reforma planteada:

1. Generar condiciones que permitan a las organizaciones políticas avanzar hacia la institucionalización y la democratización.
2. Desarrollar un método de elección que logre mayor legitimidad y que acerque a los ciudadanos con sus representantes, específicamente con los diputados electos por el sistema de distritos y con los alcaldes y corporaciones municipales.
3. Lograr una autoridad electoral más eficiente en la realización de sus funciones.
4. Adecuar procedimientos y plazos para las consultas populares.
5. Corregir algunos aspectos de la reforma electoral anterior.

A partir de esto, la Comisión procedió a elaborar un documento base que se hizo público, junto con una convocatoria a todos los grupos de la sociedad, interesados en discutir y aportar en el proceso. Se realizaron audiencias públicas en las que participaron diecinueve (19) organizaciones:

- Asociación de Mujeres Alas de Mariposa
- Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ)
- Convergencia Cívico Política de Mujeres
- Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL)



3/80



0000053

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

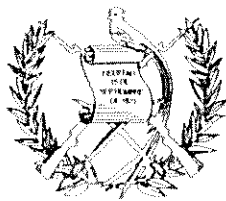
- Acción Ciudadana
- Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)
- Asociación de Estudiantes Sancarlistas, El Colectivo
- Asociación de Amigos del País
- CONSORCIO, -USAC, URL, ASIES -
- Movimiento Cívico Nacional (MCN)
- Asociación Civil Paz Joven
- Asociación SOMOS
- Movimiento Pro Justicia
- Partido VALOR
- Partido Liberal Guatemalteco (PLG)
- Fundación Esquipulas, Asociación Liderazgo, Incidencia y Desarrollo (ASOLIDES)
- Movimiento Semilla
- Instituto de Servicios a la Nación
- Amigos del País
- CONAREP

Posteriormente la Comisión invitó a los partidos políticos para que, en una reunión con ellos, expresaran sus criterios respecto al documento base. En esa oportunidad participaron las siguientes organizaciones políticas:

- FCN-NACIÓN
- Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-
- CORAZÓN NUEVA NACIÓN
- Movimiento Reformador -MR-



4/BD



01000,54

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

- Victoria
- Convergencia
- Encuentro por Guatemala -EG-
- Visión con Valores – VIVA-
- FUERZA
- VALOR
- Unión del Cambio Nacional –UCN-
- Productividad y Trabajo –PPT-
- Compromiso, Renovación y Orden –CREO-
- Partido Unionista
- Partido de Avanzada Nacional –PAN-
- WINAQ

Para finalizar las consultas con diversos sectores, la Comisión consideró fundamental conocer los criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral, en tanto órgano encargado de aplicar la Ley en cuestión, debe ser tomado en cuenta por su conocimiento de la realidad y práctica política cotidiana.

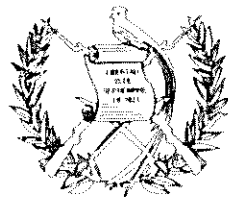
CONTENIDO DEL DICTAMEN

Institucionalización y la democratización de las organizaciones políticas:

De forma general un Estado tiene base en su institucionalidad, de esta se espera sea avanzada y fuerte y se logra esto cuanto sus normativas y leyes son más eficientes y aplicables, así como cuando este cuerpo es más cohesionado y menos distorsiones se observen en sus regulaciones y resoluciones.



5/60



01000 155

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

La institucionalidad establece procesos para moderar la conducta de los ciudadanos, facilita las relaciones humanas y es el instrumento ideal para la resolución de conflictos en la relación del Estado- en su forma abstracta- y el ciudadano – en su forma concreta-.

La institucionalidad en el marco de los partidos políticos, incluye el conjunto de prácticas, reglas y procedimientos establecidos que regulan la vida interna, permitiendo saber de antemano la ruta a seguir para alcanzar puestos directivos o electivos. Reglas y procedimientos que trascienden personas y limitan la concentración de poder y de capacidad de toma de decisiones.

Por otra parte se conoce como democracia interna (de los partidos políticos) aquellos procesos que suponen la adopción de los principios de la institucionalidad a lo interno de las organizaciones políticas, esto significa, en el amplio espectro, la inclusión de la posibilidad de realizar propuestas y crecer dentro de los partidos por parte de sus militantes y afiliados, y le son intrínsecos los derechos de libertad de expresión y libertad de elección.

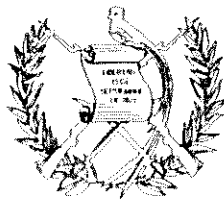
El reconocimiento de los derechos de los afiliados, hasta ahora ha estado regulado en los estatutos de los partidos y, en su gran mayoría, son normas de poco conocimiento por parte de los afiliados y no permiten un contexto favorable para ejercerlos.

Sin lugar a dudas la participación de los afiliados es fundamental, estos con su activismo político, el ejercicio de funciones de dirigentes en diferentes niveles, la participación en representación partidaria; se constituyen en la esencia de la organización.

El proyecto de decreto incorpora, de manera enunciativa y no limitativa, una serie de derechos de los afiliados, en tanto sujetos clave en la vida partidaria. Los derechos son: participación con voz y voto secreto en las asambleas respectivas, postulación a cargos



6/20



0000056

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

directivos de las organizaciones políticas y a cargos electivos, derecho a expresar públicamente desacuerdo con la dirigencia, y recibir capacitación y formación política. El objetivo es fortalecer la democratización, y procesos de organización, de los partidos políticos

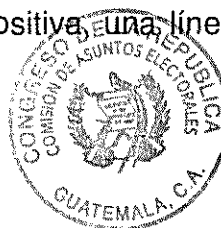
Con respecto a la necesidad de fortalecimiento en la organización, Robert Michels, en *"Partidos Políticos - un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de las democracias modernas"* (1911, se cita la versión de 2001) -, enfatiza:

"La organización genera y determina la vida del grupo en general y de cada grupo en concreto. La organización es el resultado del propio desarrollo de la sociedad; es un proceso derivado de los crecientes niveles de complejidad social, no el resultado de agentes deliberadamente generadores de organización.

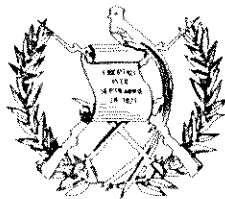
Esto no quiere decir que el principio organizativo sea comprendido como un elemento neutro, por el contrario, plantea la organización como condición necesaria para el funcionamiento de la democracia, medio para llevar adelante la voluntad colectiva en cuanto condición esencial para la lucha política".

Es importante considerar lo expresado por Angelo Panebianco, como uno de los autores que ha estudiado la organización de los partidos políticos; en su obra *"Modelos de Partido"* (1982) donde aseveró que "las normas protegen a los dirigentes asegurándoles legitimidad, pero también pueden amenazarlos abriendo canales por los que pueden ser contestados y sustituidos".

La función de las Asambleas Municipales, departamentales y nacional, denota la importancia del afiliado en la organización de los partidos como pilar fundamental del sistema político nacional. Se crea una influencia positiva, una línea de fortalecimiento en



7/80



01-00057

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

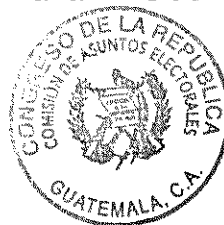
dos vías: desde el individuo - la colectividad- hacia la organización partidaria y viceversa, se contribuye a afianzar los vínculos entre partidos y afiliados, dirigidas a lograr mayor adhesión e identificación, así como a garantizar procedimientos de democracia interna y renovación de liderazgos.

Actualmente los delegados a las asambleas no votan de manera libre y secreta, sino que lo hacen por aclamación, se leen las decisiones a tomar y, ante una pregunta y a la "vista pública", el afiliado o delegado emite voto levantando la mano. El presente proyecto crea de manera obligatoria para elección de dirigentes y de candidatos, que el voto será secreto, garantizando la libertad de elección y la voluntad por mayoría de los afiliados.

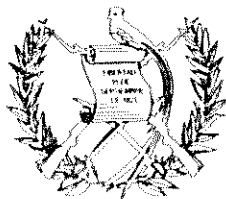
El objeto de esta reforma refuerza los procesos internos de democratización, necesarios para los partidos en modernización, y la independencia de candidaturas legitimadas por los afiliados, para una mayor calidad del ejercicio de la representación pública.

Esto se complementa con una nueva función asignada a quien es designado por parte de la autoridad electoral para observar las asambleas: levantar un acta en la que se hace constar los nombres de quienes resultaren electos a puestos directivos o de elección popular, misma que será firmada por quien presidiere la asamblea y quien hubiere fungido como Secretario. Hay antecedentes de cambio de candidaturas post asamblea, vulnerando la decisión de la base partidaria. Con esto se busca garantizar que la base partidaria sea quien, en última instancia, tome las decisiones que por ley le corresponde.

Es una práctica casi generalizada de que el Secretario General de las organizaciones políticas también será su candidato a la Presidencia. Esto ha resultado en



8/60



01660,58

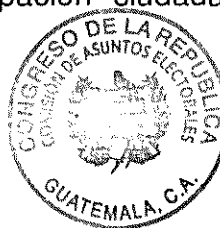
Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

organizaciones políticas que orientan su actuar a generar las condiciones para el éxito de la campaña presidencial. La formación de cuadros, la vida interna, la generación de propuestas sobre problemas nacionales, el posicionamiento con respecto a las actuaciones de gobierno, la escogencia de dirigencias y candidatos locales y departamentales son, entre otro tantos, quehaceres de los partidos que pueden verse determinados por las aspiraciones de quien se postulará a la candidatura presidencial y dirige el partido.

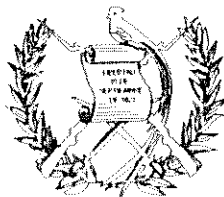
Esta propuesta de reforma propone que quién ostente el cargo de Secretario General, no pueda postularse como candidato presidencial, pues se concibe que la función de dirigente partidario tiene como fin último el fortalecimiento y crecimiento de la organización en todos los niveles.

Para no limitar el derecho a elegir y ser electos, así como para permitir una elección de la base partidaria libre de coerciones, se propone que si el Secretario General de los partidos aspira a la candidatura presidencial, deberá renunciar a su puesto con antelación a las asambleas de postulación. Lo anterior disminuye la influencia que pueda tener en la designación de candidatos o elaboración de las listas, aunado a la prohibición de no integración de los familiares del Secretario General en la estructura organizativa de los partidos.

La reforma busca disminuir, si no evitar, el nepotismo y la centralización de la toma de decisiones a la hora de designar candidaturas. Ello conllevará el impulso a la democratización interna de las organizaciones políticas. Las conducciones legítimas serán privilegiadas y se incentivará una mayor participación ciudadana hacia los partidos políticos.



9/80



0000059

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

El equilibrio entre el financiamiento público y privado es primordial para un sano desarrollo de las organizaciones políticas, en la actualidad este balance se ve afectado por altas cifras de aportes privados a los partidos. En la mayoría de los casos la fuente es entregada consecuentemente a los intereses del inversor cuando no bajo una propuesta de recuperación en el ejercicio del poder. Lo anterior conduce a la compra de voluntades y conflictos de interés que desarticulan el espíritu del sistema de partidos y conducen a la pérdida de credibilidad en las organizaciones políticas.

El financiamiento excesivo de las campañas electorales distorsiona el proceso democrático con consecuencias visiblemente negativas para la ciudadanía y la gobernabilidad.

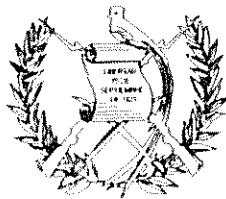
Respecto al financiamiento, debe considerarse el aporte de Daniel Zovatto, al afirmar en su publicación *"Dinero y Política en América Latina, Una Visión Comparada"* (2004):

"El tema del financiamiento político, entendiendo por tal la política de ingresos y egresos de los partidos tanto para sus actividades electorales como permanentes (...) " (...) [es una] condición *sine qua non* —junto con la importante cuestión del acceso a los medios de comunicación— para la celebración de procesos electorales verdaderamente competitivos.";

por su parte, Gruenberg en su obra *"El costo de la democracia, poder económico y partidos políticos"* (2007), expuso la importancia del financiamiento durante una campaña electoral declarando que "(...) La competencia electoral consiste fundamentalmente en informar a los votantes sobre la ideología y los programas de gobierno que promueve cada candidatura (...) esta actividad requiere de servicios y conocimientos que solo se pueden conseguir en el mercado privado (...)"; y, volviendo a citar a Zovatto:



10/80



00000.60

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

"(...) parece lógico y necesario para la salud de la propia democracia la existencia de un cierto grado de financiación, tanto pública como privada, del quehacer político y electoral, por ser estas actividades centrales para la perdurabilidad del sistema democrático".

En escenarios donde el financiamiento público es marginal, los partidos que tengan acceso a los poderes económicos seguirán gastando, y los que no, seguirán participando en condiciones de inequidad.

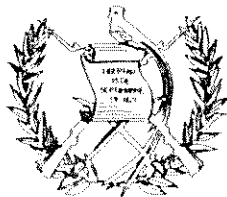
Es necesario que el sistema político establezca una relación equilibrada entre estas dos fuentes de financiamiento. La reforma que se presenta adiciona un dólar más de financiamiento público el cual, en gran medida, se destina a las actividades ordinarias del partido así como a actividades asociadas a la campaña electoral, orientándose la calidad del gasto dirigido a los afiliados. Con el fin de que las propias instituciones políticas promuevan, hacia lo interno, una cultura política democrática.

El objetivo final acotar los límites del financiamiento privado que llegan a las organizaciones políticas con la posibilidad de coacer desde decisiones de aspecto legislativo hasta las políticas públicas que, derivado de su ejercicio, respaldan e implementan; así como fortalecer las capacidades financieras internas para llevar a cabo sus funciones de manera satisfactoria.

Se conduce a modificar la tendencia hacia la baja de la actividad partidaria que ha existido en períodos no electorales y la postura instrumental hacia la política, que explicaría por qué las inversiones se realizan fundamentalmente en actividades relacionadas estrictamente con las elecciones y no en actividades ordinarias.



011/80



00689.61

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

El aspecto clave en este sentido, es la capacitación y acompañamiento que el Tribunal Supremo Electoral, como parte de sus atribuciones, debe llevar adelante en coordinación con las organizaciones políticas, así como la aprobación de reglamentos para el manejo y rendición de cuentas del financiamiento público y privado. Aún más, siendo novedoso el hecho de regular que las personas individuales o jurídicas que divulguen campañas cívico políticas por cualquier medio de comunicación y redes sociales estarán sujetas, por parte del Tribunal Supremo Electoral, a procesos de control y fiscalización del financiamiento aplicables a las organizaciones políticas; tomando en reparo que estas operan sin el control de la máxima autoridad en materia electoral en el país , por lo que es necesario que exista un control exhaustivo de sus operaciones, el origen de sus fuentes de financiamiento y respondan legalmente en la medida que estas viven y se alimentan de los procesos electorales.

La vida interna de los partidos está determinada por las actividades que realizan, de las cuales las de los órganos permanentes están reguladas en Ley. De estas actividades el único control que se tiene son las actas firmadas y no existe un registro verídico de su realización o de la presencia de los firmantes; por lo que tampoco se tiene certeza de la realidad o justicia de sus decisiones.

En el Dictamen se obliga a las organizaciones políticas registrar la agenda de actividades de sus órganos permanentes lo que conlleva el control de estas por parte del Registro de Ciudadanos, aunque la reunión se llevará a cabo sin la presencia de sus delegados.

Se pretende con la reforma generar una vida partidaria, a niveles de órganos permanentes, más dinámica y constante. Así como evitar decisiones unilaterales o sin consenso, la inactivación del espíritu de la creación de los órganos permanentes.



0 12/80



00000062

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Una nueva forma de elegir a diputados distritales, alcaldes y corporaciones municipales.

El proyecto de reforma también propone un reordenamiento hacia lo interno de los distritos electorales que definen la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

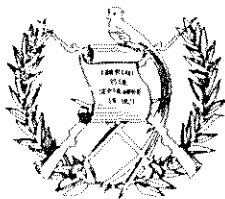
La importancia de revisar la conformación territorial para elegir diputados radica en dos aspectos: Primero lograr la cercanía del elector con los elegidos, segundo permitir nóminas que puedan admitir métodos de elección con listas que incorporen foto y nombre de los postulados, que posibiliten al elector dar su voto a una persona de manera directa, sea por sistema de lista desbloqueada o de lista abierta. En ese sentido es importante señalar que el diseño actual haría inviable en la práctica el transitar hacia un modelo de elección por personas, en virtud del tamaño de los listados y la cantidad de partidos que postulan, especialmente con la última reforma aprobada, pues ésta otorga a los partidos espacio en medios de comunicación a costa del Estado, y además determina la cancelación de organizaciones que no participen en la contienda electoral. De lo anterior es altamente probable que el número de organizaciones políticas en contienda será mayor al de procesos anteriores.

"Distrito" es un concepto que procede del latín districtus ("separar"). El término se utiliza para nombrar a las fronteras o delimitaciones que permiten dividir una región territorial para organizar la administración, la función pública y los derechos del tipo político y civil y, en nuestro sistema electoral refiere a un territorio que elige cierto número de escaños.

Existen diferentes modelos de distritos, desde los uninominales, los plurinominales, hasta los distritos nacionales. De esa cuenta en algunas legislaciones, los distritos corresponden a la distribución político-administrativa de los estados; hay países donde existen



013/80



01000063

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

únicamente distritos uninominales como Estados Unidos, países con distritos plurinominales -como el nuestro- y países como Israel donde el país entero es un único distrito.

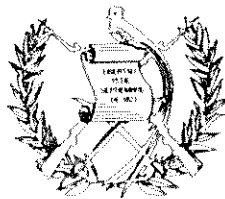
También existen países que con alguna periodicidad redelimitan sus distritos y otros que lo han hecho en reformas a su norma electoral. Handley y Grofman (2008) plantean que son cuatro los principales criterios en los que se basa esta reestructuración: equidad poblacional, geografía, grupos minoritarios e intereses comunes; siendo generalmente la equidad poblacional y los grupos minoritarios los dos motivos más concurrentes.

En el ensayo *"Armando el Rompecabezas: los distritos electorales en Guatemala"* de Javier Fortín, publicado por ASIES se plantea que los distritos en "Guatemala coinciden con la división administrativa del Estado por departamentos con la excepción del departamento de Guatemala (...). Por otro lado, el sistema guatemalteco cuenta con dos tipos de distritos electorales primarios: el nacional y el distrital.". Y se plantea que estos son inflexibles por las delimitaciones constitucionales en el artículo 157 de nuestra Carta Magna que reza en su segundo párrafo:

"Cada uno de los departamentos de la República, constituye un distrito electoral. El Municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La Ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al veinticinco por ciento de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional."



14/80



00000064

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

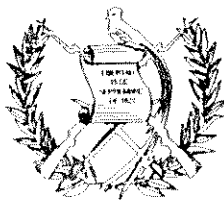
La aseveración en el ensayo es una verdad a medias pues si bien los distritos electorales de la nación están delimitados a los departamentos con su debida excepción, la composición electoral interna de los mismos no está delimitada más allá de los municipios y un reordenamiento que no rompa la "frontera" del distrito -aunque lo redistribuya hacia lo interno y sin violar los territorios municipales- no constituiría una falta a los preceptos estipulados en nuestra Carta Magna. Es pertinente señalar la previsión constitucional que en el mismo artículo se otorga potestad legislativa al Congreso de la República pudiendo este fijar parámetros nuevos siempre que no se violen los preceptos de la propia Constitución.

Según algunos especialistas, en la medida que los distritos tienen un alto número de empadronados, una amplia extensión territorial o un número elevado de escaños a elegir, el vínculo entre los representantes y representados se debilita, es escaso y en ocasiones casi nulo.

En la reforma propuesta se mantienen la conformación de los distritos que la Constitución de la República en el artículo 157 define, así como el número de diputados que se estableció como una cifra fija en los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el artículo 55 del Decreto 26-2016 (128 distritales y 32 por el sistema de lista nacional) pero se indica que aquellos que elijan más de cinco diputados sean -posterior a cada censo y siguiendo criterios poblacionales, geográficos y culturales- divididos en circuitos electorales llamados subdistritos, que postularán un mínimo de tres y un máximo de cinco diputados al Congreso de la República; buscando que los representantes tengan un alto grado de acercamiento con el electorado, que este privilegie sus liderazgos y organizaciones políticas haciendo más equitativa la competencia electoral.



015/80



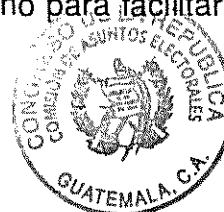
01-06-165

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

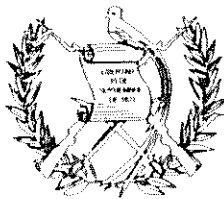
Los distritos de magnitud cercana a 4 tienen a mantener un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, posibilitando que varias fuerzas políticas alcancen escaños en la medida que obtiene apoyo popular. Varios estudios académicos han demostrado que la magnitud de los distritos influye directamente en la relación votado-votante y que repercute en la configuración de los planes de gobierno de acuerdo a la cantidad de representantes que elige. Hoy en día el "20 por ciento de los territorios constituye el 50 por ciento de la asamblea" (Brolo, Javier; El Tamaño Importa, 2013). Por otra parte el mismo estudio confirma que "los distritos de magnitud baja que emplean una fórmula proporcional, ofrecen un amplio rango de opciones que pueden estar representadas, a la vez que los votantes y las élites políticas cuentan con incentivos para coordinarse alrededor de partidos estables"; igualmente demuestra que en los "distritos de magnitud 4 se cumple con las características del balance entre fragmentación y desproporcionalidad" y contribuyen "a crear un sistema de partidos políticos con equilibrio entre gobernabilidad y representación".

La reforma ordena que en la asignación de las curules que el Tribunal Supremo Electoral realice de los sub-distritos que componen un distrito, esta se realice acorde a la densidad poblacional; para mantener equilibradas las distintas variables resultantes en la subdistritalización en la relación con cantidad de habitantes por diputado y facilitar el conocimiento, y reconocimiento, de las autoridades por la ciudadanía así como el ejercicio de fiscalización de acciones que esta realice.

Los subdistritos electorales en una magnitud cercana a cuatro son una condición previa para la aplicación de la fórmula de elección de diputados distritales, no solo para alcanzar mayores niveles de representatividad y gobernabilidad, sino para facilitar el procedimiento



16/80



01000.66

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

de aplicación, facilitar el voto, simplificar la boleta de votación y disminuir los costos de infraestructura que pudiera necesitarse.

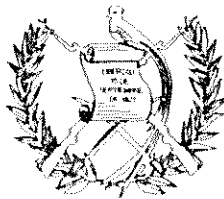
Dieter Nohlen en *"Sistemas electorales y reforma electoral. Una introducción"* (2004) hace referencia a que el sistema proporcional en circunscripciones plurinominales es un sistema que en general funciona bien, pese a no cumplir ni con la exigencia de representación ni con la de participación. Sin embargo, las listas semiabiertas contribuyen a aumentar el vínculo entre el representante y quienes le eligen, ya que será el elector quién decide por quien votar y tiene la posibilidad con su voto preferente de alterar el orden postulado por la organización partidaria en la asignación de curules. En este caso, se fortalece el liderazgo en la medida en que las organizaciones políticas se ven obligadas a acercarse y promover líderes que gocen de un amplio reconocimiento en su circunscripción.

Esta combinación que aplicaría el reordenamiento inmediatamente acercará al candidato con su elector y, al reorganizar la geografía electoral en distritos de magnitud intermedia, el sistema de partidos tenderá hacia la estabilidad, permanencia, saneamiento, representatividad y participación ciudadana. Así, en combinación con el voto preferente que se incluye en el Dictamen, se opera en sentido opuesto a los efectos negativos que hace alusión al sistema proporcional en circunscripciones plurinominales, pues estos efectos aplican en el caso de listas bloqueadas y cerradas.

"Los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules, y por consiguiente afectan la conducta del votante. Además influyen sobre si el elector vota por un partido o por una persona. (...) ambos criterios son de grado y admiten combinaciones" (Sartori, Giovanni; Ingeniería Constitucional Comparada, 1994). En la propuesta actual se mantiene el principio de proporcionalidad en el reparto de las curules,



17/80



67

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

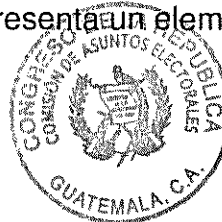
las variaciones en la asignación de los mismos las decide la voluntad popular y propicia un necesario equilibrio al "personalizar" el voto y mantener el principio establecido en el artículo 140 de la Constitución de la República sobre el sistema de gobierno republicano, democrático y representativo.

Para establecer la proporcionalidad del sistema a valorar se deben balancear varios aspectos como: garantía de la voluntad popular, sistema de partidos políticos, magnitud del distrito y sistemas de asignación.

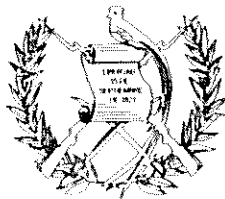
Los sistemas de representación proporcional como el que se aplica según nuestra legislación, responden a la lógica de establecer una adecuada proporción y correlación entre la cantidad de votos que se requieren para la asignación de un escaño. El sistema actual ofrece solamente la alternativa de avalar los listados tal como los determinó la asamblea partidaria respectiva, sin posibilidad de ser alterados en su orden.

Dentro de la lógica descrita anteriormente, un ciudadano elige un representante, por ejemplo, en el distrito Guatemala, con una participación media de diecisiete organizaciones políticas, de entre 323 propuestas, mientras que en el distrito de El Progreso lo hace de entre 34 candidatos: el derecho de individualizar la delegación de confianza y voluntad de un ciudadano en otro no se ejerce en las mismas condiciones en todo el territorio y dificulta el reconocimiento positivo de la forma de elegir autoridades.

A pesar de que existen diversos modelos en el mundo, muchos de ellos ignoran el voto al partido posterior a la asignación de escaños, determinando quienes deben ocuparlos únicamente a partir de los votos directos recibidos por los candidatos postulados. Esta Comisión considera que es importante mantener el ascendente del partido sobre todos y cada uno de sus candidatos, en virtud que el partido representa un elemento cohesionador



18/81



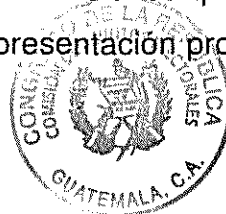
00000068

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

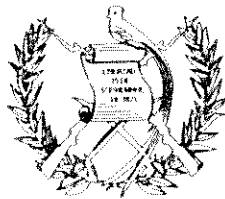
que determina, en buena medida, los juicios y las decisiones que ha de tomar quién resulte electo, especialmente en los temas de gran importancia y trascendencia nacional. Aunado a esto la tendencia latinoamericana, de la cual Guatemala no escapa, de personalizar la política impide que se estructuren sistemas sólidos que respondan de mejor manera a los retos de la administración pública, entendiendo que los partidos políticos son la puerta de entrada al poder político, como bien dice Sartori: "Mientras el elector vote simple y llanamente por un notable local o alguna clase de cacique local (en el contexto del personalismo latinoamericano), los partidos seguirán siendo etiquetas de poca monta, si es que tienen alguna". (Ingeniería Constitucional Comparada, Sartori 2010).

La ruta que debe seguir el país no es hacia una mayor fragmentación en el poder legislativo, hecho que empieza a ser la tendencia en 2006 y, llegando caso extremo en la actualidad: sistema sumamente fragmentado, incluso a lo interno de los bloques legislativo, mismos que se han constituido a partir de personas que no fueron electos por los partidos políticos a los cuales representan dichos bloques. Es necesario, de esa cuenta, mantener cohesión partidaria, ascendente del partido sobre los electos para poder lograr mayores niveles de gobernabilidad a lo interno del Organismo Legislativo, de manera tal que el aparato estatal, con sus tres poderes, empiece a funcionar de mejor manera.

La presencia de elementos proporcionales en el sistema electoral, "partido" y "persona" puede instrumentarse de tal forma que no sólo crezca la estabilidad gubernamental, sino que se incremente a través suyo la legitimidad de la representación política y así la estabilidad del sistema democrático y de cada una de las instituciones que lo representan y sobre todo, los partidos políticos. De tal forma, que la representación proporcional con la



19/82



01000169

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

inclusión de lo que se ha denominado representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente es una demanda que operaría en ese sentido.

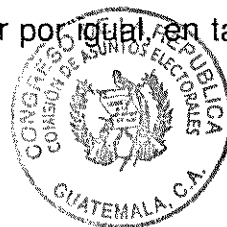
Dieter Nohlen plantea que el sistema electoral es dinámico y debe responder a los contextos específicos en los cuales se aplica, deben ser contemporáneos a las exigencias sociales, la demanda popular y consecuente con los resultados esperados, al respecto dice:

"El mejor sistema electoral es el que se adapta mejor a los requisitos de lugar y tiempo. Esta tesis implica que el contexto político y sociocultural importa mucho a la hora de diseñar un sistema electoral, pues es el que decide de alguna manera si este va rendir mejor en relación a los valores priorizados, cuya realización se espera (...) No se trata, pues, de escoger entre sistemas electorales, sino de diseñarlos. Esta tesis ya tiene consecuencias para una reforma electoral: favorece a sistemas electorales que permiten un diseño específico, o sea, favorece a los sistemas combinados."(La reforma del sistema binominal desde una perspectiva comparada, 2006).

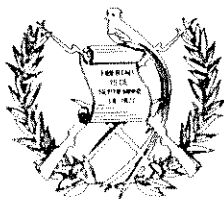
En el sistema que se propone para la elección de diputados distritales cada ciudadano significa un voto que puede ser emitido por la lista partidaria, avalando la propuesta del partido, o por un candidato en específico, delegando su representación en ese delegado.

Para evitar invalidar votos de ciudadanos cuyas marcaciones evidentemente expresan la elección del votante, se adicionan las variables siguientes para considerar válidos los votos, evitando con esto, que la intención claramente determinable del elector se proteja.

Es importante mencionar que tanto el voto por el partido, como el voto por las personas son decisiones legítimas y ambas deben de contar por igual, en tanto expresa la voluntad



20/80



01680,70

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

del votante. Es precisamente esta voluntad la que es el objeto último y el bien tutelado de la democracia; este axioma funciona en las dos direcciones, dado que democracia es también, al emitir el ciudadano su voto preferente, garantía de la voluntad popular.

La asignación de escaños se efectuará en dos etapas; la primera corresponde a la asignación de curules por partido; la segunda se asigna las curules a lo interno de la lista partidaria.

Los resultados de este sistema varían el orden de elección de las panillas partidarias según la distribución del voto al partido y el voto a las personas; cualquier variación entre estos dos elementos, cada cual en su caso y según su proporción, resultaría en candidatos diferentes electos. (Figuras 1, 2, 3)

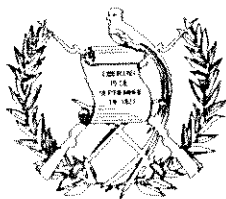
A continuación se presenta ejemplo de un distrito electoral que elige cuatro diputados. Se plantean escenarios en los que el voto a la lista varía porcentualmente; los votos a los candidatos, de manera individual mantendrá la proporción en cada uno de los ejemplos, es decir, el candidato A siempre tendrá 3.25%, candidato B% 25.6%, candidato C% 41.46% y candidato D 29.67% del total de votos emitidos a favor de personas.

	VOTOS POR LISTA	PUESTO INVERTIDO	CIFRA PONDERADORA	VOTOS PONDERADOS	VOTOS DIRECTOS	TOTAL
Candidato A	1608	4	1	1600	988	2588
Candidato B	1608	3	0.75	1200	7782	8,982
Candidato C	1608	2	0.5	801	12,603	13,404
Candidato D	1608	1	0.25	400	9,019	9,419

Figura 1. Aplicación de la fórmula, 5% voto a la Lista. Resultan electos en su orden candidato C y D.



21/10



01000,71

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

	VOTOS POR LISTA	PUESTO INVERTIDO	CIFRA PONDERADORA	VOTOS PONDERADOS	VOTOS DIRECTOS	TOTAL
Candidato A	7400	4	1	7400	800	8200
Candidato B	7400	3	0.75	5,550	6,298	11,848
Candidato C	7400	2	0.5	3,700	10,199	13,899
Candidato D	7400	1	0.25	1,850	7,299	9,149

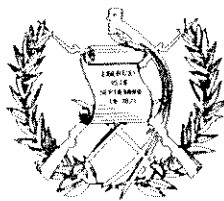
Figura 2. Aplicación de la fórmula, 23.13% voto a la Lista. Resultan electos en su orden candidatos C y B.

	VOTOS POR LISTA	PUESTO INVERTIDO	CIFRA PONDERADORA	VOTOS PONDERADOS	VOTOS DIRECTOS	TOTAL
Candidato A	16,000	4	1	16,000	520	16,520
Candidato B	16,000	3	0.75	12,000	4,096	16,096
Candidato C	16,000	2	0.5	8,000	6,633	14,633
Candidato D	16,000	1	0.25	4,000	4,747	8,747

Figura 3. Aplicación de la fórmula, 50% voto a la Lista. Resultan electos en su orden candidatos A y B.



22/80



01000572

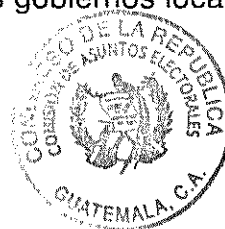
Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

La cobertura territorial de las organizaciones políticas se descentralizará y deberá tener mayor presencia en sectores del país donde tradicionalmente al acercamiento es a las mayorías y no a las personas, obteniendo -por consiguiente- un mayor conocimiento de la realidad del país y mayor objetividad a la hora de tomar decisiones, lo que los ciudadanos percibirán compromisos más estables entre el sistema político y sus intereses, así como un incremento de su incidencia en el modelo de desarrollo del país.

Los diputados electos con este sistema no solo tienen el respaldo del partido sino que también se ven respaldados por el apoyo personal – político- de los votantes que en la boleta distrital marcaron su nombre dentro de la planilla del partido: la ciudadanía alcanzará la representación justa y gozará de mayor estabilidad política, los diputados deberán establecer mecanismos de rendición de cuentas y espacios abiertos de atención permanentes.

Por otra parte este sistema creará una oxigenación periódica de las organizaciones políticas y sus liderazgos. Se podrán individualizar y medir las corrientes internas y su respaldo popular, en beneficio de las distintas corrientes y las minorías que militan dentro de la misma organización política. El proceso de democratización interna encuentra una herramienta técnica de alto valor para el desarrollo de nuevas metodologías, inclusión de sus demandas en los planes de gobierno además de la posibilidad de ser más competitivos no solo dentro de la propia planilla, sino dentro de la boleta electoral.

Refiriéndonos a la reforma para la implementación de la segunda vuelta electoral para alcalde y síndicos, la competencia electoral a nivel municipal se ha caracterizado por el incremento de la participación de organizaciones políticas y la fragmentación partidaria lo que conduce a una debilidad del sistema político de los gobiernos locales, por la escasa





00000073

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

diferencia entre los resultados obtenidos en las elecciones y la composición final de la corporación municipal.

La segunda vuelta electoral es una figura legal vigente en la Constitución de la República en su artículo 184 y en el Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el artículo 196; su implementación para la elección de autoridades locales es una ruta estratégica para aumentar la legitimidad de la elección y la disminución de la conflictividad social relacionada al proceso electoral.

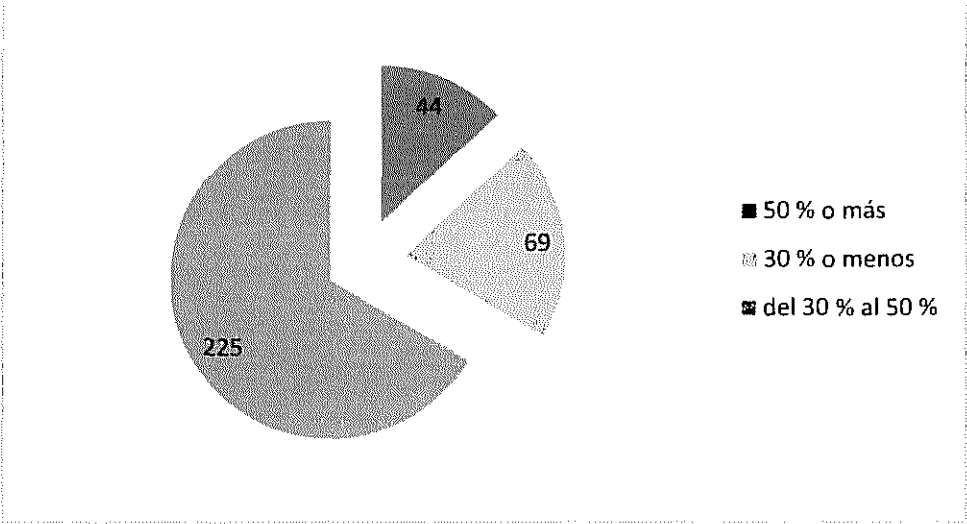


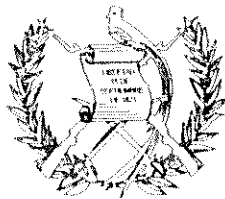
Figura 4. Porcentajes de votos alcanzados para alcaldías (2015).

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE.

En la elecciones de 2015, de las trecientas treinta y ocho alcaldías el trece por ciento fueron ganadas por organizaciones políticas que contabilizaron el cincuenta por ciento o más de los votos; otro veinte por ciento fueron electas con menos del treinta por ciento de los votos válidos. De esta cuenta la media para elegir autoridades municipales en el país oscila entre el treinta y el cuarenta por ciento, y establece parámetros claros del



24/80



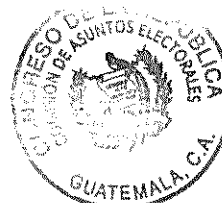
01306-74

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

comportamiento del voto y el respaldo popular a los liderazgos locales: se declarará, de forma automática, ganadora a la planilla que tenga la mayor cantidad de votos siempre que estos superen el cuarenta por ciento o más de los votos válidos emitidos, o siempre que supere el veinticinco por ciento de los votos válidos emitidos y que la diferencia entre esta y la segunda supere el cinco por ciento de los mismos. (Figuras 4 y 5)

Podemos encontrar casos como el del municipio de Patzicía que fue ganado con el diecisiete por ciento de los votos válidos emitidos o Patzún que llegó al dieciocho por ciento, hasta extremos como los municipios de Ipala y Zunilito que fueron ganados con setenta y uno y setenta y siete por ciento respectivamente, lo que evidencia la desproporción y la fragilidad de las autoridades electas por una evidente minoría, sin dejar fuera de este análisis que la asistencia a las urnas, en 2015, tuvo una media del setenta por ciento de los electores, lo que disminuiría dramáticamente las cifras de apoyo popular.

La representación política es reconsiderada en la comprensión y aplicación del concepto "mayoría relativa" en el caso de las autoridades municipales: se plantea que en determinadas condiciones cuantitativas en referencia a los resultados obtenidos en la elección ordinaria- conforme al umbral antes descrito-se realice una segunda vuelta electoral para alcalde y síndicos y no así para la corporación, la cual quedará compuesta conforme a los resultados de primera vuelta. Así en 2015 setenta y nueve alcaldías hubieran pasado a segunda vuelta o el veintitrés por ciento del total.



25/80



01066,75

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

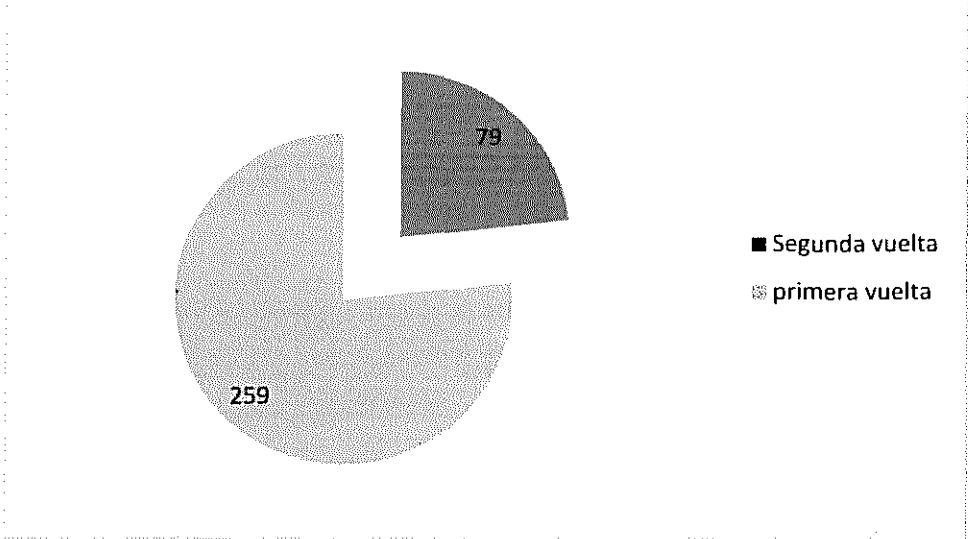


Figura 5. Alcaldías a segunda vuelta (2015).

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE

[Firma]

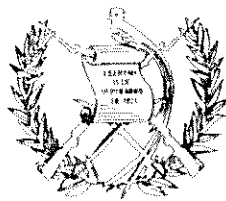
La reforma delega la sucesión del cargo de alcalde en los síndicos en la búsqueda de respetar el voto popular que define a que organización política deposita su confianza para gobernar en el período; con esto se responde, de forma permanente, a la voluntad expresa del soberano y consolida las políticas públicas y planes de desarrollo en la agenda del grupo que ejerce el poder. Estos cambios fortalecen la voluntad popular que, complementada con la participación de la ciudadanía que solamente puede postularse a cargos de elección popular en la jurisdicción donde ejerza su derecho al voto, experimentará un aumento en la percepción positiva de sus representantes y de la legitimidad en de la estructura del sistema electoral.

El mecanismo de segunda vuelta para alcaldes y síndicos surge de la necesidad de tener autoridades locales con un mandato legítimo, sólido e integral, replanteándose la

[Firma]



24/80



01099,76

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

distribución y contribución de las distintas organizaciones políticas en la búsqueda de mayor gobernabilidad y una mejor relación del ciudadano con sus autoridades.

Tribunal Supremo Electoral más eficiente

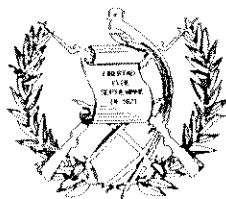
Inscribirse en el Registro de ciudadanos es un derecho de todo guatemalteco que previamente haya obtenido su Documento de Identificación Personal, solo con esta condición previa puede ejercerlo y quedar facultado para otros derechos establecidos en el artículo 3 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La garantía de los derechos políticos se reconoce a la legislación electoral de los estados y ha sido puesta de manifiesto en resoluciones emanadas de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, que -en sentencia de seis de agosto de dos mil ocho (*Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos*)- consideró:

“(...) En el ámbito de los derechos políticos, la obligación de garantizar resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos u oportunidades (...). Sin esa acción del Estado los derechos a votar y a ser votado, simplemente, no podrían ser ejercidos. Los derechos políticos (...) son derechos que no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada normativa e, incluso, sin un completo aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia. Si no hay códigos o leyes



27/80



00000077

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

electorales, registros de electores, partidos, políticos, medios de propaganda y movilización, centros de votación, justas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, este sencillamente no se puede ejercer (...)"

En la práctica el proceso de inscripción se realiza en dos fases y lugares distintos que involucran a las instituciones Registro Nacional de las Personas (RENAP) y Registro de Ciudadanos, lo que hace que el proceso se burocratice y dificulte para el ciudadano que, una vez identificado abandona el proceso de empadronamiento ante las dificultades de poder concretarlo de una forma rápida y orgánica, además de los gastos que puede conllevar en movilización, dietas y otros.

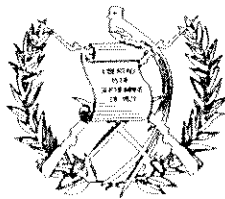
El padrón electoral de las elecciones de 2011 a 2015 creció apenas un dos punto ocho por ciento, de siete millones trecientos cuarenta mil ochocientos cuarentaiuno (7,340,841) a siete millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos setenta y tres (7,556,873) con una diferencia de doscientos dieciséis mil treinta y dos empadronados; lo que significa que el promedio de ciudadanos empadronados por cada sede municipal es de un ciudadano cada dos días.

Lo anterior contrasta con la entrega de más de dos millones de nuevos Documento Personal de Identificación del periodo 2009 a 2015, lo que establece una relación de un empadronado por cada diez Documento Personal de Identificación nuevos emitidos.

Por otra parte, al estar operando estos servicios en distintas sedes, los gastos aumentan y se duplican. Entre ambas instituciones, por la obligatoriedad de tener sedes en cada municipio, réntan un mínimo de seiscientos ochenta propiedades para el ejercicio de sus funciones, lo que redundo sobrecostos para el presupuesto nacional; si a esto se le



28/80



01000078

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

adicionan los gastos permanentes de servicios, sueldos y otros, los valores son considerablemente altos contra los logros que se han obtenido.

En la propuesta se dispone que, con el fin de facilitar el proceso de inscripción en el Registro de Ciudadanos una vez obtenido el Documento Personal de Identificación, existan subdelegaciones del Registro de Ciudadanos en las Sedes del Registro Nacional de las Personas.

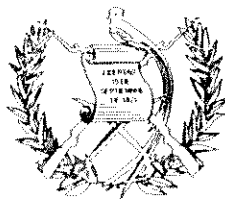
En la actualidad el artículo 124 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente regula las calidades de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y les asigna las mismas que corresponden a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; por lo que gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos y están sujetos a igual responsabilidad.

El aspecto a considerar es que en la ley actual se deja fuera a profesionales de diferentes Ciencias del conocimiento humano, para poder optar al Cargo de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, tomando en consideración que actualmente pertenece a un solo gremio de profesionales la oportunidad de optar al puesto. Esta falta de diversidad monopoliza las capacidades de los Magistrados atentando contra el buen cumplimiento de sus otras funciones no derivadas del ejercicio con la Ley.

A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral es, como su nombre indica, un tribunal, su materia de conocimiento no pertenece a la rama penal sino que lo determina su carácter político electoral, rector del proceso democrático del país y con funciones que en un amplio espectro de actividades que van desde lo regulatorio a los procesos electorales, aspectos propios de la administración, fiscalización de organizaciones políticas así como investigación y resolución de asuntos de su competencia, con capacidad de establecer



29/80



00000079

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

sanciones pecuniarias y administrativas, más no de resolver en materia penal u otras ramas de las ciencias jurídicas.

En ese orden de ideas en la propuesta de reforma se considera viable dejar exequible a otros profesionales de ramas del conocimiento humano (leyes, matemáticas, ciencias sociales, otras) para que se pueda integrar el Tribunal Supremo Electoral de forma integral, que fortalezcan los distintos procesos (según su naturaleza) y puedan tomar decisiones o aplicar nuevas metodologías de trabajo apuntando a la modernización; esta integración creará un órgano con mayores capacidades para el desarrollo de sus funciones al abordar de forma multidisciplinaria las distintas acciones que le son encomendadas y sería un mejor reflejo de la composición de nuestro sistema.

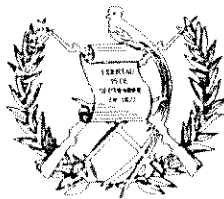
Otro aspecto a considerar es que el derecho es evolutivo y que tiene relación directa con otras ramas del saber humano; que se necesitan conocimientos bastos que coadyuven para que de manera integral puedan resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. 8

Se refuerza el derecho de las organizaciones políticas a la revisión de resultados electorales, normándose el plazo para la audiencia, solicitud y la revisión inmediata del lugar o lugares donde existan incongruencias . Y siendo el proceso electoral determinante para la construcción de mayorías, la certeza de que la decisión popular está siendo reflejada en las elecciones es la columna vertebral del trabajo de Tribunal Supremo Electoral en la validación de los resultados electorales. Esta medida preserva la estabilidad política (siendo una herramienta legitimadora de doble vía) y el orden social.

La revisión de los resultados de la votación es una de las etapas cruciales del proceso electoral. La inestabilidad y las dificultades para emitir la resolución y transmitir los



30/80



00000580

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

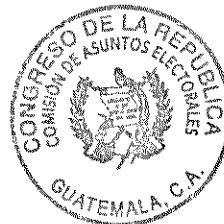
resultados finales de manera clara y oportuna influyen directamente en la aceptación y reconocimiento de las autoridades electas y de las organizaciones políticas.

El objeto de esta reforma apunta a tener mayor certeza y transparencia respecto a la voluntad popular expresada en las urnas. El caso del Diputado Walter Félix es un ejemplo de lo que se quiere evitar, quien tuvo que esperar dos años, once meses y nueve días para obtener la resolución positiva de la asignación de su curul, asignada previamente de manera equivocada a un representante de otro partido político.

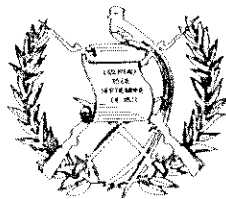
La programación electrónica del proceso electoral, junto a la recepción de manera automática de los informes emitidos a las Juntas Electorales, el acceso a resultados parciales de conteo de votos, incide en costos de tiempo, seguridad, eficiencia y transparencia en el manejo de la información.

Se incorpora la figura del fiscal informático que asegura y refuerza el papel fundamental que los fiscales de cada partido, acreditados en el Tribunal Supremo Electoral ante el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo que obliga a legislar en esta área con el objeto de modernizar el sistema jurídico y los procesos políticos institucionales, complementando los sistemas tradicionales. Es importante destacar que, como se norma la asistencia de los fiscales y de los fiscales informáticos a las sesiones, implica fortalecer la certeza de acción de la administración electoral.

La inacción o retardo administrativo en los casos que atañe esta Ley, ha creado situaciones sui generis que han vedado, en cierta medida, la libre competencia electoral y mantenido a personas e instituciones propias de nuestro sistema electoral en un limbo legal e inoperante, afectando la posibilidad de lograr el favor ciudadano en la decisión que se toma en las urnas electorales.



31/80



01600081

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Respecto a las consecuencias negativas del retardo en las peticiones Hugo Calderón en el estudio "Silencio administrativo y sus efectos en la legislación guatemalteca" plantea que "Las autoridades administrativas no siempre dan una resolución categórica a las peticiones y gestiones de los particulares, por lo que los particulares no pueden determinar cuál es el alcance de su situación, por la incertidumbre que encierra el hecho que no se les resuelva una situación jurídica."

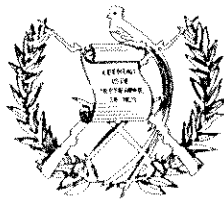
Esta Comisión considera que existe la necesidad del cumplimiento de los pasos establecidos en ley, en búsqueda de la estabilidad del sistema, la institucionalización y fortalecimiento de las organizaciones políticas y la competencia electoral equitativa.

En la reforma se le facilita al Tribunal Supremo Electoral las compras y contrataciones en época electoral. Se facilitan así los procedimientos con el fin de que el proceso electoral sea eficiente y pueda cumplir con el Principio de Garantía de la voluntad popular expresado en la reforma al artículo 15 Bis que respalda este Dictamen.

Procedimientos consultivos

Respecto a los procesos consultivos, al ser un ejercicio de democracia directa y siendo está un proceso de construcción de mayorías, se norman los tiempos – luego de recibir acuerdo gubernativo o legislativo – en asuntos de especial trascendencia así como la publicidad que debe recibir y los idiomas en que debe ser divulgado el proceso; legitimando las acciones que el Gobierno en consonancia con el proceso consultivo, resuelva.





07-0990182

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Corrección a aspectos de la reforma anterior

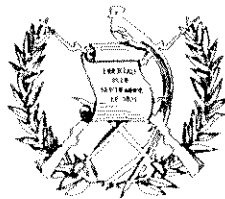
La Comisión considera que debe eliminarse la obligatoriedad de destinar los recursos del financiamiento público hasta el nivel municipal, ya que esto provoca no una repartición de los recursos sino una atomización sin efecto objetivo. En dependencia al apoyo popular que hayan recibido las organizaciones políticas las cifras a depositar en cuentas bancarias municipales no estimularían el crecimiento partidario, ni asegurarían la cobertura de las necesidades comunes de la vida interna del partido que debe entenderse como los pagos de funcionamiento (sedes, servicios, sueldos) y otras actividades no relacionadas con los procesos de formación política.

A la fecha existen organizaciones políticas que, según los porcentajes que determina la ley, deben hacer llegar a sus órganos permanentes municipales cifras desde sesenta a cien quetzales lo que hace ineffectivo el financiamiento público.

También en la reforma se estandariza a dos años de gestión los Comités Ejecutivos Nacional, departamentales y municipales, con sus respectivos secretarios e integrantes, pues en la reforma anterior no se establecieron plazos homologados, lo que creaba complicaciones en la interpretación de la norma.



16 33/80



01000083

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DICTAMEN

En virtud de lo anterior, los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, con fundamento de las atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Legislativo le confieren el presente **DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES** a las iniciativas 5059 y 5158, que disponen aprobar reformas al decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos; por considerarse proyectos de decreto viables, oportunos, convenientes y Constitucionales.

Dado en la ciudad de Guatemala, el día martes 28 de noviembre de dos mil diecisiete, en el salón de sesiones de casa Larrazabal

[Firma]
Oscar Arturo Arqueta Mayén
Presidente

[Firma]
Ana Victoria Hernández Pérez
Vicepresidenta

[Firma]
Mayra Alejandra Carrillo De León
Secretaria

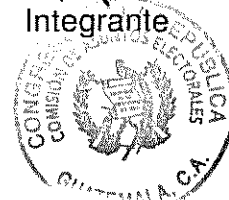
[Firma]
Felipe Alejos Lorenzana
Integrante

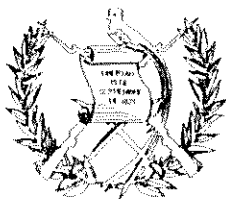
[Firma]
Erwin Enrique Álvarez Domínguez
Integrante

[Firma]
Alvaro Enrique Arzú Escobar
Integrante

[Firma]
Orlando Joaquín Blanco Lapola
Integrante

Voto Razonado





00000084

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Carlos Enrique Chavarría Pérez
Integrante

Rubén Misael Escobar Calderón
Integrante

Juan Ramon Lau Quan
Integrante

Fernando Linares Beltranena
Integrante
9/ voto razonado.

Nineth Varenka Montenegro Cottom
Integrante

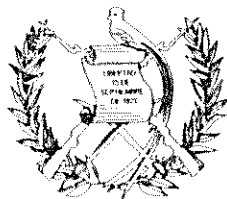
Karina Alexandra Paz Rosales
Integrante voto razonado

9/ voto razonado,
Adjunto.

Vivian Beatriz Preciado Navarajo
Integrante

Maria Cristina Quinto García
Integrante
0/ voto razonado





00000085

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

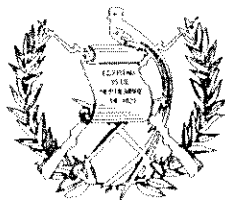
Aníbal Estuardo Rojas Espino
Integrante



Mario Taracena Díaz-Sol
Integrante

Eduardo Zachrisson Castillo
Integrante





01600,86

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DECRETO NÚMERO _____

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es obligación del estado garantizar la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Y que todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia.

CONSIDERANDO:

Que son derechos y deberes de los ciudadanos elegir y ser electos, así como velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, y que el fin del sistema político electoral, consiste en garantizar el pleno respeto de la voluntad soberana del pueblo.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a), de la Constitución de la República de Guatemala.

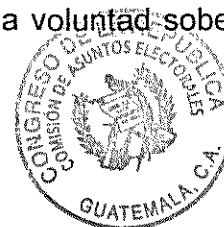
DECRETA:

Las siguientes:

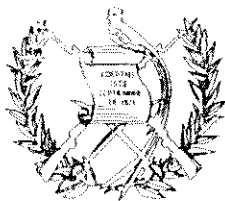
REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS, DECRETO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

Artículo 1. Se reforma el artículo 15 bis del decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

“Artículo 15 bis. Garantía de la voluntad popular. El fin primordial del sistema político electoral y de la presente ley, es garantizar el respeto pleno de la voluntad soberana del



37/80



01-000,87

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

pueblo expresada por medio del voto. La autoridad electoral es la responsable de que el resultado de los procesos electorales este apegado a la voluntad popular."

Artículo 2. Se reforma el primer párrafo de la literal a) del artículo 19 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"a) Que cuente como mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.50% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones generales, que estén en el pleno goce de sus derechos políticos. Por lo menos la mitad debe saber leer y escribir."

Artículo 3. Se reforman las literales c), e) y h) del artículo 20 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales quedan así:

"c) Designar dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la convocatoria a una elección, a sus respectivos Fiscal Nacional y Fiscal Informáticos Nacionales y acreditarlos oportunamente ante el Tribunal Supremo Electoral.

Los Fiscales Informáticos de las organizaciones políticas podrán actuar junto al Fiscal Nacional, a nivel nacional, departamental y municipal, en la fiscalización de la creación, implementación y utilización de los programas informáticos que utiliza el Tribunal Supremo Electoral, durante el proceso electoral. Los partidos podrán designar a Fiscales y Fiscales Informáticos en los municipios y departamentos donde considere conveniente.

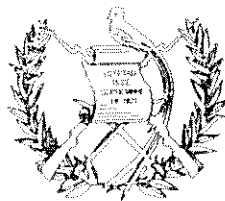
El Tribunal Supremo Electoral, a través de sus dependencias proporcionará a los fiscales las facilidades para garantizar la realización de su labor.

Los fiscales de los partidos políticos tienen derecho de asistir a las sesiones y fiscalizar las acciones del Tribunal Supremo Electoral y de todos los órganos electorales temporales durante el proceso electoral;"

"e) Recibir de forma automática, al mismo tiempo que el Tribunal Supremo Electoral, el informe al que se refiere el artículo 240 de la presente Ley, y dentro de los tres (3) días posteriores al día de la elección, a recibir de parte del Tribunal Supremo Electoral, copia digitalizada de las actas de cada Junta Receptora de Votos;"



30/80



00000088

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

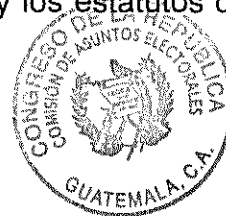
"h) Desarrollar proselitismo en época no electoral, entendiéndose como la realización y difusión en medios de comunicación de cualquiera de las siguientes acciones:

- i. Afiliación;
- ii. Organización;
- iii. Captación de recursos;
- iv. Formación y capacitación política;
- v. Análisis de la realidad nacional;
- vi. Difusión de su ideología, propuestas y programas;
- vii. Expresión de sus posiciones políticas;
- viii. Convocatorias;
- ix. Cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas."

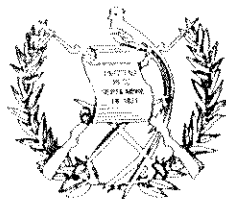
Artículo 4. Se adiciona el artículo 20 Bis al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 20 Bis. Derechos de los afiliados. Son derechos de los afiliados:

- a) Recibir capacitación y formación política;
- b) Participar con voz y voto en la asamblea municipal celebrada en el municipio del cual es vecino.
- c) Postularse para los cargos de:
 - i. Directivo;
 - ii. Delegado a la asamblea departamental y a la asamblea nacional; y
 - iii. Cargos de elección popular.
- d) Obtener, previa solicitud escrita, copia simple o certificada de todos los documentos oficiales de la organización política;
- e) Expresar públicamente disenso sobre cualquier decisión tomada por los órganos directivos de la organización política o por las asambleas de la misma, sin que ello le represente ser sujeto de represalia o de sanción alguna;
- f) Otros derechos establecidos en la presente Ley y los estatutos de la respectiva organización política.



39/80



01-000080

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Los afiliados podrán exigir el cumplimiento de estos derechos ante el Comité Ejecutivo respectivo de la organización política y el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral."

Artículo 5. Se reforma el artículo 21 bis del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

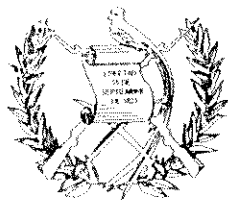
"Artículo 21 Bis. Del financiamiento público de las organizaciones políticas. El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente en Quetzales de tres Dólares (US\$3.00) de los Estados Unidos de América, por voto legalmente emitido a su favor en las elecciones anteriores, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento (5%) del total de los votos válidos emitidos. El cálculo se hará, tomando como base la mayor cantidad de votos válidos recibidos, o para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República o en el Listado Nacional para los cargos de diputados al Congreso de la República. Se exceptúan del requisito del cinco por ciento (5%) a los partidos que obtengan por lo menos una diputación al Congreso de la República, quienes recibirán igualmente financiamiento.

Las organizaciones políticas destinarán el financiamiento de la forma siguiente:

- a) Treinta por ciento para la formación y capacitación de afiliados; para efectos de esta Ley se consideran fines de formación ideológica y política los gastos realizados para formar y capacitar afiliados, cuadros, fiscales electorales de los partidos políticos, publicación de material para formación y capacitación, así como el pago de inscripción, transporte, hospedaje y alimentación para recibir cursos de formación política y de estrategia organizativa o electoral en el país o en el extranjero;
- b) Treinta y cinco por ciento para actividades nacionales; compromisos financieros internacionales por afiliación a redes u organizaciones internacionales de partidos políticos; funcionamiento de la estructura partidaria nacional, pago de sede y sus servicios básicos; gastos de hospedaje y transporte de los dirigentes nacionales, funcionarios y empleados del partido para actividades partidarias en el territorio nacional o en representación del partido en el extranjero; pago de salarios de personal administrativo y operativo; contratación de servicios de investigación



40/80



01-000,90

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

cuantitativa y cualitativa; otros rubros propios del funcionamiento y quehacer político de la organización nacional.

El año posterior a que se realicen las elecciones este recurso podrá ser destinado a pago de deuda de campaña recién pasada.

- c) Treinta y cinco por ciento para funcionamiento y otras actividades del partido en los departamentos en los que el partido tenga organización partidaria vigente. Los recursos a los que se refiere la presente literal, deberán ser distribuidos por el secretario departamental, atendiendo a la disponibilidad financiera, actividades y necesidades en los municipios en los que el partido tenga organización partidaria vigente. Para determinar los montos que correspondan a cada órgano permanente departamental, se utilizará como base para el cálculo, el total de empadronados que hubo en la última elección en cada distrito electoral. Los secretarios departamentales deben enviar su presupuesto anual al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación;

En el año que coincide con las elecciones, los partidos podrán destinar el total de la cuota anual del financiamiento público que les corresponde, para cubrir gastos de campaña electoral, así como saldos que hubieran quedado de la ejecución en años anteriores, los cuales solo podrán ser contabilizados a partir del inicio oficial de la respectiva campaña electoral.

Previa solicitud justificada, el Tribunal Supremo Electoral podrá autorizar al Comité Ejecutivo Nacional, una variación a la proporción establecida en las literales b) y c) de este artículo de hasta un veinte por ciento (20%).

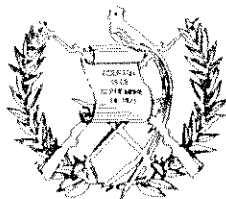
El pago del financiamiento de los partidos políticos, se efectuará en cuatro cuotas iguales dentro del periodo presidencial correspondiente, una por año en el mes de enero.

Los bancos del sistema tienen la obligación de abrir y mantener cuentas a todos los órganos permanentes de los partidos políticos, a nivel nacional, departamental y municipal.

En caso de coalición el financiamiento se distribuirá conforme lo determine el convenio de coalición."



41/80



07000,91

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 6. Se reforman el primer párrafo de la literal c) y la literal k) del artículo 21 ter del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales quedan así:

"c) Las organizaciones políticas a través de sus comités nacionales, llevarán, y conservarán por cuatro años, registros contables organizados de conformidad con las leyes de la materia. Sin perjuicio de la obligación anterior, las organizaciones políticas y financistas políticos deben llevar los siguientes libros:"

"k) El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento conlleva la aplicación de las sanciones administrativas o penales que determine la ley. En lo relativo a organizaciones políticas se tendrá como responsables individuales al Secretario Nacional, secretarios departamentales o municipales, personas que realicen aportes, quienes las reciban o los candidatos que se beneficien de ellas."

Artículo 7. Se reforma la literal n) y se adiciona la literal ñ) al artículo 22 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales quedan así:

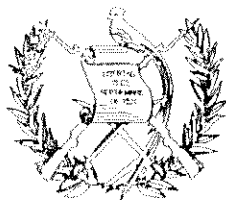
"n) Remitir informe financiero anual al Tribunal Supremo Electoral, firmado por el Secretario Financiero del partido y el Presidente del Órgano de Fiscalización Financiera. La autoridad electoral, cuando considere pertinente, podrá ordenar la realización de auditorías a los partidos políticos, para determinar el cumplimiento de la presente Ley.

ñ) Remitir al Registro de Ciudadanos, dentro de los treinta días posteriores a la reunión de toma de posesión de cada órgano permanente y cada vez que se modifique, el cronograma de reuniones ordinarias del respectivo órgano permanente en el que se incluya lugar, fecha y hora de su realización. El Registro de Ciudadanos podrá nombrar un delegado para constatar la realización de las reuniones programadas. La reunión del órgano permanente del que se trate, se llevará a cabo sin la presencia del delegado antes mencionado.

Los órganos permanentes podrán realizar sesiones extraordinarias, para lo cual se deberá convocar a todos los miembros que integran dicho órgano e informar al Registro de Ciudadanos, simultáneamente, para proceder de la manera establecida en el párrafo anterior."



42/80 8



0000092

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 8. Se adiciona una oración al final del primer párrafo del artículo 25 del Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Los secretarios departamentales podrán participar en las asambleas nacionales con voz y voto."

Artículo 9. Se reforma la literal d) y se adiciona la literal l) al artículo 27 al Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales quedan así:

"d) Voto. El voto en las asambleas será secreto, cada integrante a la asamblea debidamente acreditado, tendrá derecho a un voto. El reglamento de la Ley y los estatutos del partido definirán los mecanismos que garanticen la pureza del proceso y el respeto a la voluntad de la mayoría de los integrantes de las respectivas asambleas";

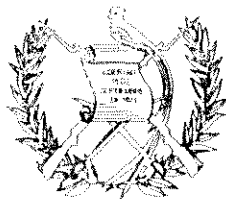
"l) En las asambleas de las organizaciones políticas los delegados del Tribunal Supremo Electoral se faccionarán un acta en la que hagan constar las personas electas para conformar los órganos permanentes y, en las asambleas de postulación, el listado de los candidatos que resultaren electos para representar al partido; el acta será firmada por el delegado del Tribunal Supremo Electoral, el Presidente de la Asamblea y el Secretario de la Asamblea de la misma, en el acto."

Artículo 10. Se adiciona el artículo 27 Bis al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"**Artículo 27 Bis. Inscripción de las Asambleas.** Las actas de las asambleas nacional, departamentales y municipales deben ser inscritas por el Registro de Ciudadanos o su delegado respectivo dentro de los veintiún (21) días posteriores a la recepción de la certificación de la misma; si la autoridad no emitiera resolución o no impusiera previos dentro del plazo antes fijado, se dará por aprobada la asamblea respectiva."



43/50



1993

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 11. Se reforma el primer párrafo del artículo 31 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano permanente de dirección del partido; tiene la responsabilidad de ejecutar las resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional y la dirección en toda la República de las actividades del partido. Se deberá integrar con un mínimo de quince miembros y un máximo de veintidós titulares y un mínimo de tres suplentes, electos por la Asamblea Nacional para un período de dos años. El número de miembros del Comité deberá ser impar."

Artículo 12. Se reforma el primer párrafo y se adicionan dos últimos párrafos al artículo 32 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, los cuales quedan así:

"El Secretario General tiene la representación legal del partido desempeñando su cargo por dos años, salvo que en la Asamblea Nacional se le elija por un período menor; podrá ser reelecto por un período más. Podrá optar al cargo nuevamente siempre que haya transcurrido el mismo tiempo por el que lo desempeñó. En todo caso, su responsabilidad se extenderá hasta la fecha en que haga formal entrega de su cargo a la persona que conforme a la ley deba sustituirlo. En caso de ausencia temporal o definitiva, la vacante será cubierta por el Secretario General Adjunto que corresponda, según el orden de elección."

"El cargo de Secretario General es incompatible con la candidatura presidencial del partido; si el Secretario General aspira a la candidatura presidencial deberá haber hecho efectiva su renuncia al cargo, tanto ante el Comité Ejecutivo Nacional como ante el Registro de Ciudadanos, como mínimo seis meses antes de la convocatoria a elecciones."

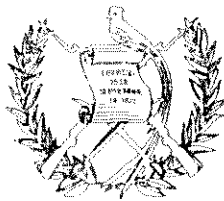
Los familiares del Secretario General, dentro de los grados de ley, no podrán integrar ninguno de los órganos contenidos en la literal a) del Artículo 24 de la presente Ley."

Artículo 13. Se reforma el primer párrafo del artículo 43 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"**Secretario General Departamental.** El Secretario General Departamental tiene la representación del partido en su circunscripción, para la ejecución de las resoluciones de los órganos partidarios nacionales o departamentales. Desempeñará su cargo por dos años."



44/80



00000094

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

podrá ser reelecto por un periodo más; y podrá optar de nuevo al cargo siempre que trascurra un período de por medio. Su ausencia siempre será suplida por el Secretario General Departamental Adjunto."

Artículo 14. Se reforma el último párrafo del artículo 50 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"El Comité Ejecutivo Municipal durará en sus funciones dos años, quienes lo integran podrán ser reelectos por un periodo más; y podrá optar de nuevo al mismo cargo siempre que transcurra un período de por medio. En todo caso, su responsabilidad se extenderá hasta la fecha en que hagan formal entrega de su cargo a las personas que conforme a la ley deben sustituirlos."

Artículo 15. Se reforma el artículo 124 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 124. Calidades. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral deberán ser profesionales universitarios con grado de Licenciatura, colegiados activos con más de diez años de ejercicio profesional; gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Quienes podrán ser reelectos.

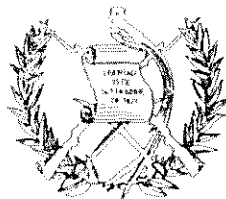
Los miembros titulares del Tribunal Supremo Electoral no podrán ejercer su profesión salvo lo estipulado en el Artículo 112 de la Constitución Política de la República de Guatemala, prohibición que no afecta a los miembros suplentes, salvo asuntos referentes a materia electoral.

Los magistrados no podrán ser asesores o mandatarios de partidos políticos, comités proformación de los mismos y sus personeros y de cualquier otra organización de carácter político, ni directivos de dichas organizaciones."

Artículo 16. Se reforma la literal u); y se adicionan las literales y) y z) al artículo 125 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, las cuales quedan así:

"u) Diseñar y ejecutar programas y procesos de:





00000195

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

- i. Formación y capacitación cívica electoral para ciudadanos; y programas de formación y capacitación sobre normativa electoral a partidos políticos.
 - ii. Capacitación y acompañamiento a las organizaciones políticas en lo relativo al financiamiento público y privado, así como en el registro y elaboración de informes y rendición de cuentas;
- “ y) Generar y aprobar reglamentos, manuales de procedimientos, protocolos y formularios para todo lo relacionado con el manejo y rendición de cuentas de los fondos públicos y privados por parte de las organizaciones políticas.
- z) Definir después de cada censo poblacional la conformación de subdistritos electorales. El acuerdo que oficializa la conformación de los subdistritos al menos seis (6) meses antes de la siguiente convocatoria a elecciones generales. El Tribunal Supremo Electoral debe garantizar la pureza del proceso, la celeridad en la entrega de resultados y pleno cumplimiento al principio de respeto a la voluntad popular.”

Artículo 17. Se reforma la literal c) y se adiciona un último párrafo al artículo 154 al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo cual queda así:

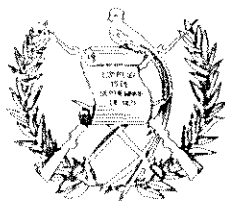
“c) Subdelegaciones en cada una de las cabeceras municipales, en las oficinas del Registro Nacional de las Personas.

El Registro Nacional de las Personas deberá brindar al Registro de Ciudadanos las condiciones para el cumplimiento de lo establecido en la literal c) del presente artículo.”

Artículo 18. Se reforma la literal a) del artículo 165 del Decreto 1-85 del Congreso de la República, Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual queda así:

“a) Realizar la inscripción de ciudadanos en el Distrito Central y Distrito de Guatemala así como en sus respectivos subdistritos, para lo cual deberá proporcionar las facilidades necesarias para la comparecencia de los ciudadanos que deben inscribirse.”





01066-96

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 19. Se adiciona el artículo 195 Bis al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 195 Bis. Compras y contrataciones. A partir de la convocatoria y hasta finalizado el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral podrá adquirir bienes y servicios que se utilicen exclusivamente durante y para el evento electoral, exento de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Los eventos deben cumplir los principios de transparencia, eficiencia y competencia. Todos los eventos deben ser publicados en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala – GUATECOMPRAS-. Además publicará un informe mensual de gastos por todos los medios a su alcance.

Noventa días después de terminado el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral entregará al Congreso de la República un informe detallado de los gastos realizados bajo esta modalidad de excepción.

La Contraloría General de Cuentas realizará auditoría concurrente al Tribunal Supremo Electoral en todas las gestiones de compras y contrataciones, realizadas bajo la modalidad establecida en el presente artículo."

Artículo 20. Se reforma el antepenúltimo párrafo del artículo 196 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Si no se diera la repetición de la elección presidencial; pero si de las elecciones municipales de alcaldes y síndicos o de diputados por Lista Nacional, diputados por el sistema de distritos electorales o de diputados al Parlamento Centroamericano, las mismas se podrán realizar conjuntamente con la segunda elección presidencial".

Artículo 21. Se reforma la literal c) del artículo 197 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual queda así:

"c) Distrito electoral, subdistritos o circunscripciones electorales en que deben realizarse; y"

Artículo 22. Se adiciona la literal d) al artículo 200 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual queda así:

"d) Representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente."



47/80



01000097

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 23. Se reforma el artículo 202 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 202. De la mayoría relativa. El sistema de mayoría relativa se aplicará a las elecciones de alcaldes y síndicos.

En la elección de alcaldes y síndicos se declarará ganadora a la planilla que:

- a) Obtenga el mayor número de votos y supere el cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos;
- b) Siempre que la planilla más votada supere el veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos y la diferencia entre esta y la segunda planilla más votada supere el cinco por ciento (5%) de los mismos.

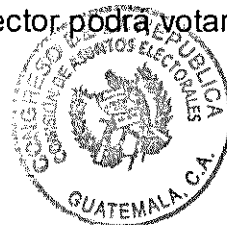
De no darse una de las condiciones antes descritas, se efectuará una segunda vuelta electoral en la que participarán las dos planillas que hayan obtenido la mayor cantidad de sufragios en la fecha que establezca el Tribunal Supremo Electoral."

Artículo 24. Se reforma el primer párrafo del artículo 203 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

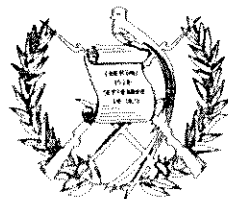
"Artículo 203. De la representación proporcional de minorías. Las elecciones de diputados por lista nacional, al Parlamento Centroamericano y la elección de concejales para las corporaciones municipales, se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías."

Artículo 25. Se adiciona el artículo 203 Ter al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 203 Ter. De la representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente. Las elecciones de diputados por distritos y subdistritos se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente. Cada elector tendrá derecho a emitir únicamente un voto. El elector podrá votar por Lista o emitir un voto directo a un candidato.



48/80



016.000.98

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Para efectos de aplicación del presente artículo, se entiende por:

a) Voto por Lista. Cuando el elector vota marcando:

- i. Todo el espacio correspondiente a la lista del partido político, dentro de la papeleta;
- ii. El símbolo del partido político, o su casilla correspondiente;
- iii. Dos o más candidatos de la lista de un mismo partido político.

b) Voto directo:

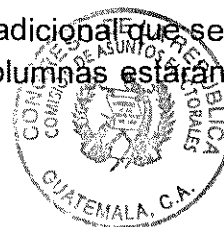
- i. Cuando el elector vota por un candidato dentro del listado del partido político, marcando la casilla específica del candidato que desea elegir;
- ii. Cuando el elector marca la casilla de un candidato específico y el símbolo del partido que lo postula.

Es voto invalido, para efectos específicos del sistema de elección determinado en el presente artículo, todo aquel en que el elector marque el espacio de dos o más partidos políticos, o cuando marque dos o más candidatos de partidos políticos diferentes.

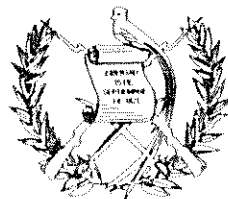
Los votos del partido político lo constituyen el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por lista, más los votos directos válidos obtenidos por cada candidato del partido.

Posteriormente, el proceso se dividirá en dos etapas, así:

- 1) La asignación de escaños a cada partido político, para lo cual se tomará como dato a contabilizar, los votos del partido y utilizará el procedimiento descrito en los párrafos segundo al cuarto del artículo 203 de la presente Ley;
- 2) A continuación, se procede a determinar los candidatos que resultan electos dentro de la lista de cada partido político, utilizando el procedimiento siguiente: Los resultados electorales se consignarán en un pliego que contendrá siete columnas y tantas filas como escaños estén en juego más una fila adicional que será la primera fila que contendrá el nombre de cada columna. Las columnas estarán en el orden siguiente:



8
49/80



000000,99

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

PRIMERA: Nombre del candidato, en el estricto orden de postulación. En caso de que un candidato no hubiera sido inscrito, se efectuará corrimiento, de manera que las últimas casillas se declaren vacantes.

SEGUNDA: Votos por Lista, se colocarán los votos que corresponden a la lista, tal como se determina en el presente artículo. El dato será el mismo para todos los candidatos.

TERCERA: Puestos invertidos, en la cual al primer candidato de la lista se le asignará el valor equivalente al número de escaños en juego en el distrito o subdistrito respectivo, al segundo se le restará un número, al tercero dos, y así sucesivamente hasta llegar al último candidato, a quien siempre corresponderá el valor 1.

CUARTA: Cifra ponderadora, este dato es el resultado de dividir los datos en la columna del "puesto invertido" (dividendo), entre el número de escaños del distrito o subdistrito (divisor).

QUINTA: Votos ponderados, esta cifra es el resultado de la multiplicación de votos por Lista y la cifra ponderadora.

SEXTA: Votos directos, en esta columna se consignan el total de votos válidos emitidos a favor de cada candidato.

SEPTIMA: Total, en esta columna se consigna el resultado de la suma de las columnas "votos ponderados" y "votos directos".

A efecto de simplificar el procedimiento descrito, se podrá aplicar la fórmula siguiente para obtener los resultados de la última columna (Total):

$$[((n+1-i) \div n) \times VL] + VD$$

Donde:

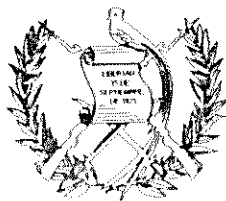
"n" es igual al número de escaños del distrito o subdistrito electoral correspondiente;

"i" es igual a la posición que ocupa el candidato en la Lista;

"VL" es el total de los votos de la Lista;



50/50



00000100

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

"VD" es el total de los votos directos del candidato respectivo.

Los escaños se adjudicarán a los candidatos en el estricto orden, de mayor a menor, según la suma del total de votos directos y votos ponderados, hasta agotar los escaños que le corresponden al partido.

En caso de existir empate en el resultado observado en la última columna, se otorgará el escaño al candidato que haya obtenido más votos directos en las papeletas electorales."

Artículo 26. Se reforma el segundo párrafo del artículo 204 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Si no fuere posible llenar la vacante de un diputado distrital o de alguno de sus subdistritos por no haber postulado disponible en la planilla del partido que causó la vacante, el cargo se adjudicará al que le corresponde en la Lista Nacional".

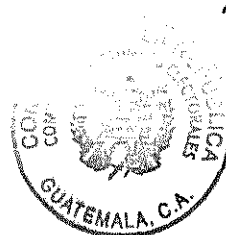
Artículo 27. Se reforma el artículo 205 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

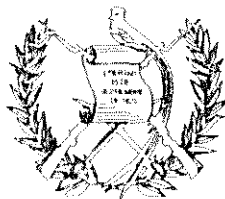
"Artículo 205. De la Integración del Congreso de la República. El Congreso de la República se integra con 160 Diputados electos en los Distritos Electorales y por el sistema de Lista Nacional. Cada uno de los Departamentos de la República, constituye un distrito electoral. El Municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros Municipios del departamento de Guatemala constituyen el Distrito Departamental de Guatemala.

El número de diputados distritales será de 128, cada distrito debe elegir como mínimo un diputado; el número de diputados por sistema de lista nacional será de 32, mismos que constituyen el veinticinco por ciento del número total de diputados distritales que integran el Congreso de la República.

El número de diputados distritales será distribuido de la forma siguiente:

- a) Distrito Central: 11
- b) Distrito de Guatemala: 19 diputados
- c) Sacatepéquez: 3 diputados.
- d) El Progreso: 2 diputados.



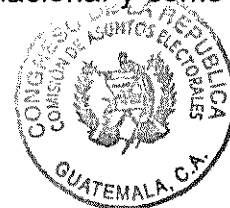


014000101

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

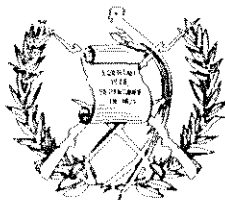
- e) Chimaltenango: 5 diputados.
- f) Escuintla: 6 diputados.
- g) Santa Rosa: 3 diputados.
- h) Sololá: 3 diputados.
- i) Totonicapán: 4 diputados.
- j) Quetzaltenango: 7 diputados
- k) Suchitepéquez: 5 diputados
- l) Retalhuleu: 3 diputados.
- m) San Marcos: 9 diputados.
- n) Huehuetenango: 10 diputados.
- ñ) Quiché: 8 diputados.
- o) Alta Verapaz: 9 diputados.
- p) Baja Verapaz: 2 diputados.
- q) Petén: 4 diputados.
- r) Izabal: 3 diputados.
- s) Zacapa: 2 diputados.
- t) Chiquimula: 3 diputados.
- u) Jalapa: 3 diputados.
- v) Jutiapa: 4 diputados.

Los distritos que eligen más de cinco diputados se dividirán en subdistritos a partir de criterios poblacionales, geográficos y culturales. En cada subdistrito electoral deberá elegirse como mínimo tres diputados. El Tribunal Supremo Electoral debe oficializar la conformación de los subdistritos después de cada censo poblacional y como mínimo seis meses antes de la convocatoria a elecciones.



[Firma manuscrita]

52/80



01000-102

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Si el Congreso de la República aprobara la creación de un nuevo municipio, este quedará dentro del subdistrito al cual pertenece el territorio del cual se desglosa. Si el nuevo municipio se formara en el territorio de dos o más subdistritos, este se adjuntará al subdistrito que menos empadronados tenga.

Si el Congreso de la República aprobara la creación de un nuevo departamento, este elegirá diputados según su peso poblacional, y ese número de diputaciones será restada del total de diputados que se eligen en el departamento del que se desprendiera.

Para elecciones a diputados distritales, los ciudadanos podrán postularse únicamente en los distritos en los cuales ejerzan su derecho al voto."

Artículo 28. Se reforman el segundo, cuarto y séptimo párrafos del artículo 206 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, los cuales quedan así:

"Los síndicos sustituirán, en su orden, al alcalde en caso de ausencia temporal o definitiva, teniendo el derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo del alcalde cuando ello suceda."

"Al producirse la vacante, los síndicos titulares deberán correrse en su orden de adjudicación, a efecto de que el suplente asuma en cada caso, la última sindicatura."

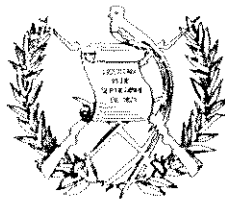
"Los ciudadanos pueden postularse a cargos de elección popular de forma exclusiva para las corporaciones municipales del municipio en el cual ejerza su derecho al voto."

Artículo 29. Se reforma el primer párrafo del artículo 209 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"El tribunal Supremo Electoral resolverá en única instancia la elección presidencial, las de diputados al Congreso de la República o a la Asamblea Nacional Constituyente, Parlamento Centroamericano y consultas populares, dictando una sola resolución para la primera, según se defina en primera o segunda ronda, y una para cada elección de diputados, sean distritales, subdistritales o por Lista Nacional. Las consultas populares se definirán en una sola resolución".



53/80



00000103

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 30. Se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 216 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Si la autoridad competente no emite la resolución sobre la inscripción de candidatos en los plazos establecidos en este artículo, se dará por afirmativa la inscripción respectiva."

Artículo 31. Se adiciona el artículo 219 Bis al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

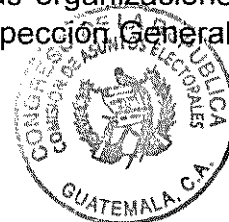
"Artículo 219 Bis. Campañas Cívico Políticas de Personas Individuales o Jurídicas: Las personas individuales o jurídicas que divulguen campañas cívico políticas por cualquier medio de comunicación social o redes sociales, estarán sujetas, por parte del Tribunal Supremo Electoral, a procesos de control y fiscalización del financiamiento aplicables a las organizaciones políticas, sin menoscabo de las obligaciones de rendir cuentas reguladas en otras leyes".

Artículo 32. Se reforma el artículo 231 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 231. Instalación de las juntas receptoras de votos. Es obligación de las juntas electorales municipales instalar las juntas receptoras en las cabeceras municipales, aldeas, caseríos, cantones u otros lugares donde existan más de trescientos empadronados. En caso de existir núcleos poblacionales con menos de trescientos empadronados, el Tribunal Supremo Electoral deberá instalar las mesas de votación en la aldea caserío, cantón o lugar que facilite la afluencia y conjuntar el número establecido."

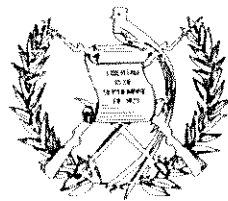
Artículo 33. Se reforma la primera oración del artículo 238 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 238. De la revisión de escrutinios. Una vez recibidas las actas y demás documentación por la respectiva Junta Electoral Departamental, ésta señalará una audiencia que tendrá verificativo a los siete (7) días de la votación, para proceder a la revisión de los escrutinios practicados por las juntas receptoras de votos que funcionen en el departamento, citando para la misma a los fiscales de las organizaciones políticas, al delegado del Registro de Ciudadanos y al delegado de la Inspección General."



18

54/86



00000104

Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 34. Se adiciona el artículo 239 Bis al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 239 Bis. Solicitud de revisión de resultados electorales. En la audiencia de revisión de escrutinios establecida en el artículo 238, si las actas de las juntas receptoras de votos a las que se refiere la literal e) del artículo 20 de esta Ley, presentan incongruencias entre los resultados de estas copias, lo divulgado el día de las elecciones, o las copias de las actas que se entregan a los respectivos fiscales de mesa, podrá solicitarse la revisión del lugar o lugares en los que existan incongruencias; la Junta Electoral Departamental deberá proceder de inmediato a realizar la revisión respectiva."

Artículo 35. Se reforma el artículo 250 Bis del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 250 Bis. Convocatoria y procedimiento Consultivo. Cincuenta (50) días después de recibir el acuerdo gubernativo o legislativo para realizar un procedimiento consultivo acerca de un asunto político de especial trascendencia nacional, el Tribunal Supremo Electoral procederá a realizar la convocatoria, fijando la realización de la consulta, dentro de ciento veinte días (120) posteriores.

El proceso consultivo sobre asuntos políticos de especial trascendencia nacional no podrá realizarse durante el año en que se realicen las elecciones generales.

La mayoría relativa será el sistema aplicable a las consultas populares.

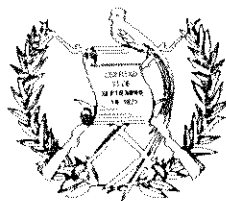
El Tribunal Supremo Electoral redactará el reglamento específico de procesos consultivos indicados en esta Ley."

Artículo 36. Se adiciona el artículo 250 Ter al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 250 Ter. Publicidad del procedimiento consultivo. El Tribunal Supremo Electoral deberá publicitar por los medios de comunicación social a su alcance y de preferencia en el propio idioma de la jurisdicción electoral, el contenido de la consulta popular y los colores o símbolos que identifican la aprobación o improbación de la misma."



55/8



Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Artículo 37. Se adiciona un último párrafo al artículo 258 del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual queda así:

"Artículo 258. Del Reglamento. Los reglamentos de la presente Ley no podrán contravenir o exceder lo establecido en el presente decreto."

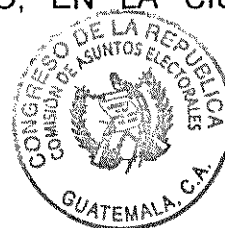
Artículo 38. Requisito de afiliados: La reforma contenida en el Artículo 2 del presente Decreto que reforma la literal a) del Artículo 19 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos se implementará de forma progresiva de la siguiente manera:

1. Hasta antes de la convocatoria a elecciones del año 2019, los partidos políticos deberán contar como mínimo con veinte mil afiliados del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones generales, que estén en el pleno goce de sus derechos políticos.
2. Hasta noventa días antes de la convocatoria a elecciones del año 2023, los partidos políticos deberán contar como mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizado en las últimas elecciones generales, que estén en el pleno goce de sus derechos políticos.

Artículo 39. Vigencia: La presente ley entra en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, con excepción de los Artículos 24, 25 y 27 que entrarán en vigencia cuando el Tribunal Supremo Electoral emita el acuerdo en el que defina los subdistritos y haga constar que se cuentan con las condiciones materiales necesarias para garantizar la pureza del proceso electoral, la celeridad en la entrega de resultados y el pleno cumplimiento al principio establecido en el Artículo 15 bis de la presente ley.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL 28 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ____.



8
54/80

01000-106



*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Voto disidente respecto a la **reforma del artículo 202 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos** que pretende las segundas vueltas en la elección de alcaldes y síndicos de las corporaciones municipales

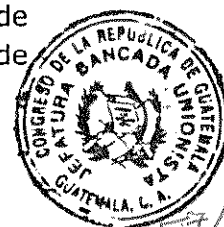
La Ley Electoral y de Partidos Políticos en su **artículo 200** establece 3 distintos sistemas de calificación del sufragio:

- i) **Mayoría absoluta:** se aplica únicamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República y, consiste en que la planilla triunfadora deberá obtener, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos emitidos. En el caso de que en la primera vuelta ninguna de las planillas obtuviera tal mayoría, se deberá de realizar una segunda elección con las dos planillas que hayan alcanzado la mayor cantidad de sufragios. (Artículo 201 de LEPP).
- ii) **Mayoría relativa:** es aplicable a las elecciones municipales de alcaldes y síndicos y obtendrá la elección en su totalidad la planilla que haya alcanzado el mayor número de votos válidos. (Art. 202 de la LEPP).
- iii) **Representación proporcional de minorías:** se aplica en las elecciones de diputados de lista nacional, distrital, Parlamento Centroamericano así como a los concejales para las corporaciones municipales. (Artículo 203 de la LEPP).

La Ley contempla estos 3 distintos sistemas para determinar al ganador de una elección porque entiende que los cargos en disputa son distintos desde su naturaleza, características atribuciones, competencia y jurisdicción por lo que no pueden tener el mismo trato.

En el caso de la planilla del Presidente y Vicepresidente estos representan la unidad nacional y poseen altas funciones y responsabilidades, dirigen un gobierno conformado por un Concejo de ministros, viceministros y demás autoridades elegidos directamente por estos, quienes tienen competencia y jurisdicción en todo el país, por lo que su forma de elección debe ser más estricta y exigente en comparación con los demás cargos a elección pública.

En el caso de los diputados al Congreso de la República y Parlamento Centroamericano se aplica el sistema de representación proporcional de minorías al entenderse que en ambos organismos constituyen un foro de





00000107

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

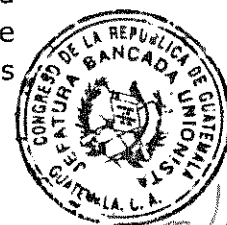
discusión por excelencia donde se tratan asuntos fundamentales del país por lo que deben de estar representado la mayoría de sectores, corrientes y posiciones políticas.

En el caso de los alcaldes y síndicos se contempla el sistema de mayoría relativa teniéndose ganador de la elección a la planilla que haya alcanzado el mayor número de votos validos, esta diferencia con respecto a la elección de presidente y vicepresidente es porque las funciones y atribuciones entre estos son totalmente distintos, teniendo los alcaldes y síndicos un determinado territorio y población donde ejercen su respectiva competencia y jurisdicción, además, el alcalde es miembro de un concejo el cual está conformado por concejales que son electos con base en el sistema proporcional de minorías, lo cual permite a las planillas no ganadoras y que a su vez representan a otros sectores, corrientes y posiciones políticas tener voz y voto dentro de las decisiones tomadas por la corporación municipal.

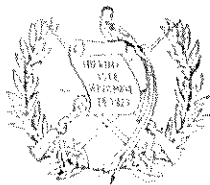
La propuesta pretende aplicar un nuevo sistema de mayoría relativa en la elección a candidatos a alcalde y síndicos, señalando que para declarar una planilla ganadora estos deben de obtener un mínimo del 40% de los votos válidos emitidos, o superar el 25% siempre que la diferencia entre este y el segundo lugar más votada supere el 5%.

En el caso de que ninguno de las planillas competidoras cumpliera con alguno de los supuestos antes señalados, las dos más votadas disputaran una segunda vuelta. El argumento de la modificación se basa en conferirle mayor legitimidad al alcalde y evitar los conflictos sociales que en el pasado han ocurrido.

Disiento totalmente de la propuesta de modificación al artículo 202 y de los argumentos que fundamenta la misma, independientemente de lo ya manifestado por el Tribunal Supremo Electoral quien se opone abiertamente a la propuesta al considerarla innecesaria, onerosa y peligrosa pues pudiera provocar más conflictos de los que se pretenden evitar, al analizar los conflictos que han suscitado en las distintas elecciones específicamente en municipalidades del interior de la República, estos surgen no por el resultado sino por distintos hechos que suceden durante el día de las elecciones o en el momento del conteo de votos como por ejemplo el acarreo de personas, la no inscripción de algún candidato, la imposibilidad de instalar un centro de votación o una junta receptora de votos, falta de enseres o papeletas en la urnas, incapacitación de los integrantes de las



58/80



00000108

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

juntas receptoras de votos, falta de seguridad, lentitud en el conteo de votos o en la transmisión de datos.

Para evitar los conflictos se deben de tomar medidas para que las situaciones antes descritas no sucedan pues al no hacerlo aunque existan segundas hasta terceras vueltas estos se producirán, es más, pueden surgir más al no comprender la población que su candidato ganador tenga que disputar una segunda vuelta.

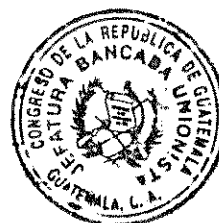
El guatemalteco con el tiempo ha ido construyendo una cultura democrática y ha ido entendiendo el sistema electoral siendo la elección de alcalde la más participativa y atrayente por lo que no hay que modificarla porque aunque no sea perfecta funciona y la mayoría de la población la acepta.

Los tres sistemas de elección ya sea absoluta, relativa o de minorías cumple con los principios democráticos, especialmente el de respetar el sentir popular y la representatividad, las 3 le confiere la suficiente legalidad y legitimidad al funcionario electo para ejercer sus tareas, lo que hace que un funcionario pierda o gane legitimidad no depende del sistema utilizado para elegirlo sino de las decisiones que tome durante el ejercicio de su función.

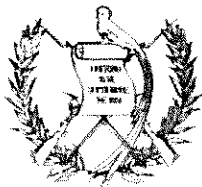
Por último serían innecesarias y onerosas en un país que lo requiere son de recursos y que estos se inviertan de forma correcta y eficiente, por ejemplo, las elecciones a presidente y vicepresidente que ha tenido Guatemala en nuestra era democrática solo en un caso de ocho el segundo lugar ha revertido el resultado de la primera vuelta, la más probable, en el caso de la elección de las corporaciones municipales se siga la misma suerte de que el triunfador sea el que sumo más voto en la primera vuelta.

Ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil diecisiete.

Alvaro Enrique Arzú Escobar
Diputado



59/80



04000-109

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

30 de noviembre de 2017
NM/dr No.052-17

Diputado
Oscar Arturo Argueta Mayén
Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales
Su Despacho


Señor Presidente.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio adjunto a la presente, voto razonado del **Dictamen N°. 1-2017** de la Comisión de Asuntos Electorales, para las iniciativas con registro 5059 y 5158 que dispone aprobar reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley electoral y de Partidos Políticos, para el efecto se adjunte a la pieza original del dictamen de mérito y en su oportunidad sea leído en la sesión Plenaria que corresponda.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,


Licenciada Nineth Montenegro
Jefa de Bancada
Encuentro Por Guatemala



60/80



01006110

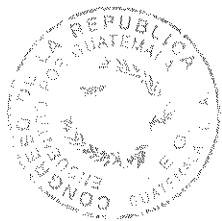
Diputada Nineth Montenegro
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

VOTO RAZONADO

DIPUTADA NINETH MONTENEGRO - BANCADA ENCUENTRO POR GUATEMALA

Comparto la mayoría de propuestas de reformas vertidas en el transcurso de la elaboración del presente dictamen que antecede, al igual que la implementación de subdistritos electorales en aras del fortalecimiento al sistema de Gobierno del Estado de Guatemala, razón por la cual me adhiero y firmo el mismo. Sin embargo han surgido dudas en el mecanismo para la adjudicación de escaños, denominado **REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE MINORÍAS CON DERECHO A VOTO PREFERENTE**, aprobado en el artículo 203 Ter, al igual que la **SEGUNDA VUELTA ELECTORAL DE ALCALDES Y SÍNDICOS** establecido en el artículo 202 del dictamen de mérito, por lo cual me han suscitado algunas reflexiones que veo en la obligación de consignar en este voto:

- I. De aquellos tipos jurídicos discutidos en la sala de la Comisión de Asuntos Electorales, uno de ellos ha sido la representación proporcional de minorías con derecho a voto preferente, desarrollado en el artículo 203 Ter, disposición que tiene por objeto general, regular la forma en la cual se adjudican los escaños a diputaciones distritales o subdistritales dependiendo el caso; además la implementación en el ordenamiento jurídico electoral del **voto directo** hacia algún candidato exclusivamente.
- II. El mecanismo matemático normado en el artículo ibídem, ha generado algunas dudas en su interpretación, implementación y resultados, de las cuales algunas han sido superadas en las sesiones de la Comisión; no obstante, su contenido pareciere contrario al espíritu de la reforma y al resultado esperado para el candidato que haya obtenido una mayoría de votos directos; por lo cual, **si estoy de acuerdo con la implementación del voto directo**, no así con la fórmula matemática, ya que su inclusión e implementación en el **Régimen Político Electoral de Guatemala**, pudiera favorecer únicamente a los partidos políticos mayoritarios, a las primeras



61/80



00000111

Diputada Nineth Montenegro
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

casillas de la planilla electoral y en consecuencia demeritar el voto directo, que ha sido reclamado por la población guatemalteca y que probablemente no se vería reflejado en la distribución de diputaciones al Congreso de la República.

- III. Por otro lado, en cuanto a la segunda vuelta electoral de alcaldes y síndicos, su implementación en el sistema jurídico electoral, probablemente genere una fuente de corrupción o arreglos que atenten no solamente contra el **Régimen Municipal** si no contra la transparencia, eficacia y eficiencia del proceso electoral; además, lo complejo y desigual que sería para todas aquellas organizaciones políticas con escaso presupuesto, ya que esta segunda vuelta posiblemente traspasaría su capacidad financiera; además el costo que tendría, podría ser muy elevado, no solamente para las organizaciones políticas o comités cívicos electorales, si no para la institucionalidad y el erario público que se ocasionaría con la programación, planificación e implementación, por lo cual se recomendó su improbación, por ser posiblemente lesivo a los intereses del Estado.
- IV. Por último, es lamentable que dentro del dictamen de mérito, no se haya incluido la paridad electoral, considerando que, en Guatemala más de la mitad de la población es femenina y en virtud que este modelo incluyente, promovería la participación de las mujeres en política, la cual históricamente ha sido muy limitada.


Licenciada Nineth Montenegro
Diputada Integrante
Comisión de Asuntos Electorales





00000112

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

28 de Noviembre de 2017

Licenciado
Luis Eduardo López
Director legislativo
Congreso de la República
Su Despacho

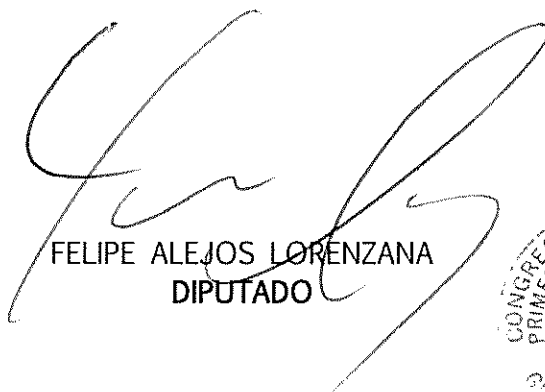
Respetable Licenciado:

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted deseando que sus actividades al frente de tan importante institución se encuentren llenas de éxito.

Adjunto a la presente, voto razonado disidente parcial del Dictamen No. 1-2017 de la Comisión de Asuntos Electorales, el cual unifica las Iniciativas de Ley 5059 y 5158 que dispone aprobar reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que solicito dicho razonamiento, sea conocido ante el Honorable Pleno.

En espera de dicha información, quedo de usted,

Atentamente,


FELIPE ALEJOS LORENZANA
DIPUTADO



623/80

00000-113

Voto razonado del Diputado Felipe Alejos:

"A consideración del análisis previo, el artículo 25 que adiciona el artículo 203 ter al Decreto numero 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyo epígrafe es **"DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE MINORÍAS CON DERECHO A VOTO PREFERENTE"**, mismo que establece lo relativo a la formula a aplicar sobre las listas abiertas y desbloqueadas, la cual no es representativa y no refleja el verdadero espíritu de abrir las listas, mismo que tiene por objeto promover la competencia por igual para todos los candidatos, sin importar la casilla que ocupen dentro de la lista, por lo que luego de haber manifestado mi postura en reiteradas ocasiones, tanto por escrito, como en discusiones dentro de la Comisión de Asuntos Electorales, y haber presentado la propuesta referente a la doble aplicación del método d'hont:

- El Diputado Felipe Alejos Lorenzana razona su voto en contra con respecto a este artículo, haciendo énfasis en la ratificación de su propuesta durante la aprobación de la presente Iniciativa de Ley."



Recibi'
Silvia Gómez
28/11/2017
64/80

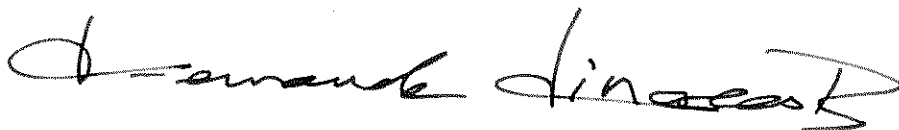
**VOTO RAZONADO AL DICTAMEN QUE PROPONE REFORMAS AL
DECRETO 1-85 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LEY
ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS.**

Razono mi voto en siguiente sentido:

0000114

1. **LIBRE ASOCIACIÓN:** Pido que se incluya en el Dictamen la Libertad de que los diputados puedan desligarse de su bloque y no ser inconstitucionalmente castigados con no poder estar en Junta Directiva o no presidir comisiones del Congreso.
2. **MEDIOS DE PROPAGANDA:** El Dictamen debería incluir que para la selección de medios de propaganda por los partidos, sólo se distribuya una lista de precios de medios, para que cada partido libremente decida con quien quiere trabajar, siempre dentro de su asignación presupuestaria.
3. **EXIGENCIA DE FINIQUITO:** Como requisito de inscripción, no deberá solicitarse el finiquito o constancia transitoria, por que se presta para divulgación política. La Contraloría debe seguir el debido proceso cobrando hallazgos o reparos sin que sirva como requisito de inscripción.

Atentamente,



FERNANDO LINARES-BELTRANENA

DIPUTADO INTEGRANTE COMISIÓN DE REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS
POLÍTICOS

16/10/2017
FLB

0000115

LEY DE INHABILITACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta iniciativa de Ley incrementa los castigos por actos de corrupción cometidos por dignatarios, funcionarios, servidores públicos y particulares, quienes, además de las penas que actualmente prescribe el Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, recibirán la subsecuente inhabilitación especial para optar a cargos de elección popular y desempeñar cualquier puesto público en todos los niveles de la administración pública o, en el caso de los particulares, su inhabilitación para sostener relación contractual con el Estado.

Para nuestro país, la corrupción es uno de los mayores problemas y uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad en su intento por alcanzar metas de desarrollo y gobiernos republicanos dentro de una forma democrática de elección de autoridades. La corrupción es cuantiosa y sus verdaderas dimensiones quizás nunca se puedan cuantificar, aunque sí estimar.

La corrupción es una cuestión compleja y generalizada. La lucha contra este flagelo solo podrá establecerse con seguridad jurídica, castigo pronto y ejemplar y separación de aquellos elementos asociados a actos de corrupción de cualquier posibilidad de ejercer cargos de poder.

El Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, no puede abstraerse de la lucha contra la corrupción y debe atacar este flagelo social a través de la promulgación de leyes que evidencien el deseo de castigar a las personas responsables de estos actos.

Afortunadamente, la falta de transparencia en los actos públicos es un hecho reconocido cada vez más por muchas personas y organizaciones como un problema urgente de resolver. Existe una mayor sensibilidad frente a la corrupción y sus terribles secuelas en la prestación de servicios sociales y el cumplimiento del Estado guatemalteco de derechos humanos fundamentales y en el combate a la pobreza y pobreza extrema.

DIMENSIÓN DEL PROBLEMA

La corrupción y la impunidad se complementan. En nuestro país, la corrupción es un problema estructural que atraviesa la sociedad, rebasa ideologías y está diseminada desde las esferas más elevadas de decisión política hasta quienes deberían luchar contra este fenómeno desde los medios y la sociedad civil.

Transparency International estima que en América Latina, la corrupción ha costado un promedio de \$ 25,000 millones anuales. En el caso de Guatemala, que nos interesa

66/80

16/10/2017
FLB

0000116

particularmente, algunos analistas consideran que el país se encuentra dentro o arriba del promedio latinoamericano de corrupción, calculando que puede representar 24 a 25% del Presupuesto General de Gastos del Estado. Si calculamos en base al actual presupuesto, de alrededor de Q 72,000 millones, la corrupción podría alcanzar alrededor de Q 17,000 millones para el presente período fiscal. Para darnos una idea del impacto, esto es equivalente al presupuesto anual combinado para los Ministerios de Educación y Salud para el período fiscal vigente.

Los efectos perniciosos de la corrupción tienen mayor impacto en países en vías de desarrollo como Guatemala, limitando el desarrollo del Estado de Derecho y poniendo en riesgo al sistema republicano de gobierno y a la democracia. Se podrá avanzar mucho tomando medidas legales que tiendan a reducir este fenómeno a su mínima expresión, con medidas urgentes como la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos y de elección popular para aquellos condenados por delitos de corrupción y contra la administración pública.

MARCO LEGAL

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 22, indica que las leyes o las sentencias firmes pueden limitar el ejercicio de los derechos constitucionales de las personas con determinados antecedentes penales y policíacos. En este caso, nos referimos a personas condenadas por delitos relacionados a la corrupción, tipificados por el Código Penal como “Delitos Contra la Administración Pública” cometidos por particulares y por funcionarios o por empleados públicos.

Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 213, indica que para el otorgamiento de cargos públicos “no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”. Uno de los parámetros a evaluar es la honradez, definida como “rectitud de ánimo, integridad en el obrar” por el Diccionario de la RAE. Aquellas personas que han cometido delitos contra la Administración Pública han evidenciado falta de integridad y rectitud en sus acciones y por lo tanto, merecen sanciones ejemplares que les impidan ejercer cargos públicos por un período de tiempo, dependiendo de la gravedad de su acción.

Estos delitos contra el conglomerado social atentan contra la esencia constitucional de los fines del Estado guatemalteco, creado para “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Debido a los actos de corrupción, el Estado de Guatemala sufre mermas en sus ingresos, en su capacidad de realizar todo tipo de proyectos, imposibilita brindar solución a las carencias que vulneran Derechos fundamentales de la población, tales como la vida, educación, salud, la promoción de una cultura de paz y de concordia y el respeto irrestricto a todos los Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Del mismo modo, resultan afectados Derechos como la pronta administración de justicia, la legislación apropiada, la recaudación fiscal,

67/80

16/10/2017
FLB

0000117

los derechos laborales y un sinnúmero de otras funciones vitales para el Estado de Guatemala y los guatemaltecos.

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003 en su prefacio, señala que “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.” Guatemala, como signataria de dicha Convención, está obligada a adoptar medidas que tipifiquen como delitos, la malversación, el cohecho —tanto pasivo como activo—, el enriquecimiento ilícito, entre otros y se compromete a penalizar la comisión de dichos delitos con sanciones que tengan en cuenta su gravedad.

En el artículo 30, inciso 7 de dicha Convención, se indica “Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención para: a) Ejercer cargos públicos; y b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.”

Por su parte, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, firmada por el Estado de Guatemala en abril de 1996 en Caracas y ratificada por el Congreso de la República en diciembre de 2001, se refiere en su artículo 5º a la Jurisdicción de los Estados Partes: “1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio. 2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.”. Siendo esta Convención firmada, ratificada y depositada por el Estado de Guatemala, su cumplimiento es de carácter obligatorio y todas las medidas legales tendientes a la erradicación de la corrupción son aceptables en el marco jurídico interamericano.

El Código Penal vigente, Decreto 17-73 contempla, en su título XIII, los Delitos Contra la Administración Pública, contenidos en los Artículos del 408 al 452. Dichos delitos son aquellos cometidos por particulares y por funcionarios o empleados públicos contra la

ca/80

16/10/2017
FLB

01800118

Administración Pública, o sea “el conjunto de organismos de gobierno de una nación” de acuerdo a la definición usual de la RAE. Son delitos que atentan contra la esencia misma del sistema, que debería servir a los habitantes de la República de Guatemala y no servirse de ellos para obtener ganancias personales. Esta propuesta de legislación contempla la inhabilitación temporal, sobreañadida a las penas de cárcel y multas, para delitos con alto impacto social, tales como incumplimiento de deberes, falsedad en declaraciones juradas, cohecho, peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales, entre otras.

Por aparte, el presente proyecto modifica el artículo 57 del Código Penal, estableciendo sentencias de inhabilitación temporal, adicional a las penas establecidas, para los delitos antes mencionados.

La presente iniciativa pretende ser un disuasivo, no solamente un castigo, para aquellas personas involucradas en actos de corrupción. No viola ningún Derecho Fundamental existente. Cumple con la Constitución Política de la República de Guatemala y con tratados internacionales contra la corrupción. No representa ningún gasto para el Estado y no viola derechos procesales del imputado.

69/80

16/10/2017
FLB

00000119

Ley de Inhabilitación para la función pública por delitos de corrupción

El Congreso de la República

Considerando

Que la corrupción es uno de los mayores problemas y uno de los grandes retos que enfrenta Guatemala en su intento por alcanzar un gobierno republicano dentro de una forma democrática de elección de autoridades que permita a los habitantes la realización del bien común y el desarrollo integral de la persona.

Considerando

Que la lucha contra la corrupción se fortalecerá con seguridad jurídica, castigo pronto y ejemplar y separación de aquellos elementos vinculados a la misma, de cualquier posibilidad de ejercer cargos de poder.

Considerando

Que en Guatemala, la corrupción es un problema estructural que atraviesa la sociedad, rebasa ideologías y está diseminada desde las esferas más elevadas de decisión política hasta quienes deberían luchar contra este fenómeno desde los sectores productivos, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Considerando

Que los efectos perniciosos de la corrupción tienen mayor impacto en un país en vías de desarrollo como Guatemala, limitando el desarrollo del Estado de Derecho y poniendo en riesgo al sistema republicano de gobierno y a la democracia

Considerando

Que la Constitución Política de la República, los instrumentos internacionales de lucha contra la corrupción refrendados por el Estado de Guatemala y el Código Penal vigente establecen la obligatoriedad del Estado de luchar contra este flagelo de impacto social.

Por tanto,

70/80

16/10/2017
FLB

0000120

En ejercicio de las funciones que le otorgan los artículos 157 y 171, inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala y en cumplimiento al mandato constitucional expresado en los artículos 1º y 2º del mismo cuerpo legal.

DECRETA la siguiente

Ley de Inhabilitación para la función pública por delitos de corrupción

Artículo 1. Se modifica el artículo 58 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 58. Aplicación de Inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación especial, cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad.

En los delitos contra la administración pública y la administración de justicia, ~~conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a cuatro años~~ **la inhabilitación absoluta o especial se aplicará después de cumplida la sentencia de prisión y el pago de la o las multas correspondientes.**”

Artículo 2. Se modifica el artículo 419 Ter del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 419 Ter: Comete delito de falsedad en declaración jurada patrimonial, el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que durante el ejercicio de su cargo incurra en falsedad al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de Cuentas.

La acción penal de este delito es independiente de los procesos por cuentas establecidos en la legislación ordinaria vigente.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años, **multa de veinticinco mil a doscientos mil Quetzales** e inhabilitación especial **por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada.**”

Artículo 3. Se modifica el artículo 439 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 439. Cohecho Pasivo. Comete delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor,

71/80

16/10/2017
FLB

0000121

dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales, e inhabilitación especial por un período de diez a veinte años después de cumplida la sentencia arriba mencionada, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte.

Las personas que denuncien los actos mencionados en este Artículo, serán protegidas por las autoridades correspondientes, de conformidad con la legislación vigente."

Artículo 4. Se modifica el artículo 442 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

"Artículo 442. Cohecho activo. Comete delito de cohecho activo, cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial por un período de diez a veinte años después de cumplida la sentencia arriba mencionada, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido."

Artículo 5. Se modifica el artículo 445 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

"Artículo 445. Peculado por sustracción. Comete delito de peculado por sustracción, el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales e inhabilitación especial por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes."

Artículo 6. Se modifica el artículo 445 Bis del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

"Artículo 445 Bis. Peculado por uso. Comete delito de peculado por uso, el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecidos en la administración

16/10/2017
FLB

00000-122

pública, utilice o permita que otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales e inhabilitación especial por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados, cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Si los vehículos, maquinarias, y cualquier otro instrumento de trabajo, trabajos o servicios estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes."

Artículo 7. Se modifica el artículo 447 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

"Artículo 447. Malversación. Comete delito de malversación, el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren, una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieren destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años, multa de veinte mil a cincuenta mil Quetzales e inhabilitación especial por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada.

Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte.

Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en dos terceras partes."

Artículo 8. Se modifica el artículo 448 Bis del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

"Artículo 448 Bis. Enriquecimiento Ilícito. Comete delito de enriquecimiento ilícito, el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, y hasta cinco años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita.

El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial por un período de cinco a diez años después de haber cumplido la sentencia arriba mencionada."

73/80

16/10/2017
FLB

000000123

Artículo 9. Se modifica el artículo 448 Ter del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 448 Ter. Enriquecimiento Ilícito de Particulares. Comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, quien sin ser funcionario o empleado público, administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del estado, hasta cinco años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos, o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos lícitos.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de cuatro a ocho años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales e inhabilitación especial por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada.

En caso que el responsable de este delito sea una persona jurídica, para la imposición de la pena, además de la inhabilitación especial permanente, se aplicará lo previsto en el artículo 38 del Código Penal.”

Artículo 10. Se modifica el artículo 449 Bis del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 449 Bis. Tráfico de Influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose para ellos de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero.

El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada.

La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicite o acepte un beneficio, con el fin de utilizar su influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público, para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona.

Si el funcionario o empleado público que esté conociendo, debe conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la administración de justicia, se impondrá el doble de la pena.”

Artículo 11. Se modifica el artículo 450 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

74/80

16/10/2017
FLB

00000124

“Artículo 450. Fraude. Comete delito de fraude en la administración pública, el funcionario, empleado público, quien ejerza funciones públicas o quien con ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora, usare cualquier artificio para defraudar al Estado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial permanente.

Si la operación en la que interviene estuviese relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.”

Artículo 12. Se modifica el artículo 450 Bis del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 450 Bis. Cobro ilegal de comisiones. Comete delito de cobro ilegal de comisiones, el funcionario o empleado público que solicite, gestione o reciba de manera directa, comisión, retribución económica, pago, promesa o cualquier tipo de beneficio para se realice o adjudique por sí o por tercera persona contrato de cualquier índole u obra pública. El responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzalese inhabilitación especial por un período de diez a veinte años después de cumplida la sentencia arriba mencionada.

Artículo 13. Se modifica el artículo 451 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 451. Exacciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales, el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años, multa de cinco mil a veinticinco mil Quetzales e inhabilitación especial **por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada.**

Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o de terceros el producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte.”

Artículo 14. Se modifica el artículo 452 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República así:

“Artículo 452. Cobro indebido. Comete el delito de cobro indebido, el funcionario o empleado público que autorice recibos o comprobantes ficticios, alterados o injustificados, o quien los cobre. El responsable de este delito será sancionado con prisión de uno a tres años, multa de cinco mil a veinticinco mil Quetzales e e

75/80

16/10/2017
FLB

0000125

inhabilitación especial por un período de cinco a diez años después de cumplida la sentencia arriba mencionada.

Artículo 15. Vigencia. La presente ley entrará en vigor un día después de su publicación en el diario oficial.

DIPUTADOS PONENTES

76/80



00000126

Diputada Karina Alexandra Paz Rosales
Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 29 de Noviembre de 2017
OF.082-2017/KAPR/lmq

Diputado
Oscar Arturo Argueta Mayén
Presidente de la Comisión de Asuntos Electorales
Congreso de la República de Guatemala

Señor Presidente de la Comisión:

Con un atento saludo me dirijo a usted, en relación al Dictamen de las Iniciativas 5059 y 5158 "Reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, me permito adjuntar el texto que contiene voto razonado parcial de la suscrita.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente.

Atentamente,



Karina Paz

Diputada Karina Alexandra Paz Rosales
Bancada Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-



00000127

Diputada Karina Alexandra Paz Rosales
Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

VOTO RAZONADO PARCIAL

KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES, en calidad de diputada integrante de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, emito **VOTO RAZONADO PARCIAL**, al dictamen emitido por la Comisión a la Iniciativa de Ley de Reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, con números de registro 5059 y 5158 con fundamento en el razonamiento siguiente:

La Convención Internacional Sobre la Discriminación de la Mujer, aprobada en la Organización de las Naciones Unidas-ONU- el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General, en su artículo 7, preceptúa que, "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para todos los organismos, cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales..."

Es indispensable que mujeres obtengan las mismas oportunidades, participación, trato y respeto que los hombres, para garantizar los principios de igualdad y no discriminación por razón de género. A pesar de dar voto favorable al dictamen, considero necesario y pertinente incluir el tema de igualdad en la participación de mujeres y hombres.

En la ausencia de una participación espontánea y equitativa del género femenino en puestos de elección popular, se hace necesario legislar a favor de la paridad de género o en su defecto, cuotas de representación, tal como se propuso en las sesiones relacionadas con la discusión de las presentes iniciativas; lo cual puede ser incluido a través de una moción privilegiada en la que se adicione un artículo en el que se regule el tema relacionado.


DIPUTADA KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-



78/80



000000128

Congreso de la República
Guatemala, C. A.

28 de Noviembre de 2017

Licenciado
Luis Eduardo López
Director legislativo
Congreso de la República
Su Despacho

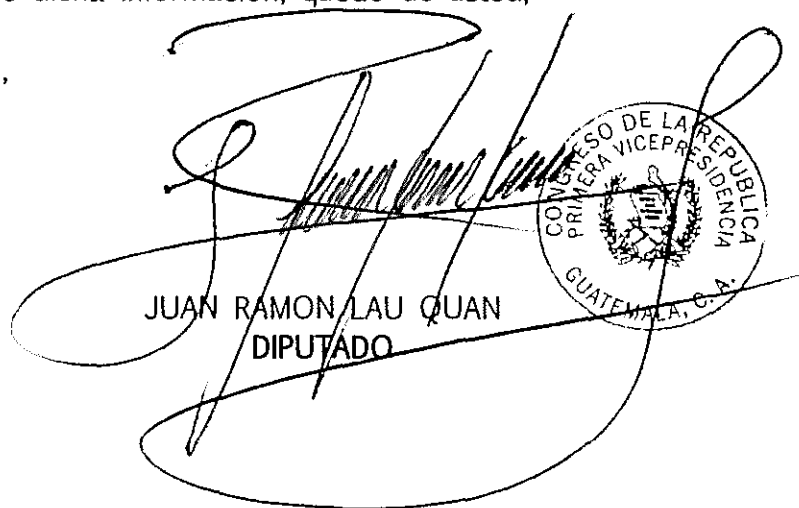
Respetable Licenciado:

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted deseando que sus actividades al frente de tan importante institución se encuentren llenas de éxito.

Adjunto a la presente, voto razonado disidente parcial del Dictamen No. 1-2017 de la Comisión de Asuntos Electorales, el cual unifica las Iniciativas de Ley 5059 y 5158 que dispone aprobar reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que solicito dicho razonamiento, sea conocido ante el Honorable Pleno.

En espera de dicha información, quedo de usted,

Atentamente,

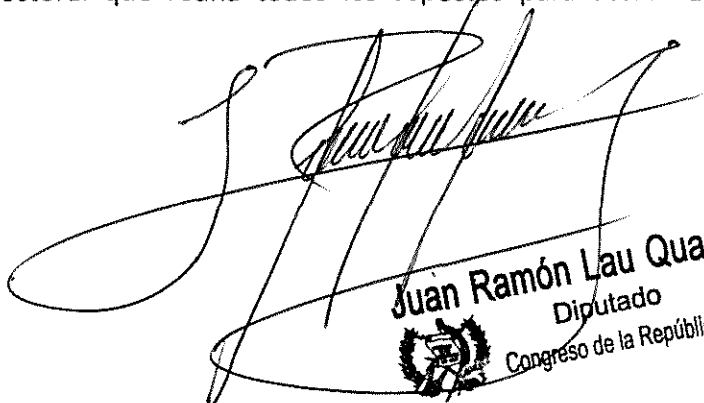

JUAN RAMON LAU QUAN
DIPUTADO



Voto razonado del Diputado Juan Ramon Lau Quan:

"El artículo 25 que adiciona el artículo 203 ter al Decreto numero 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos sobre las listas abiertas y desbloqueadas, propone la aplicación de una fórmula que castiga el voto de los electores, favoreciendo a las primeras casillas, por lo que luego de la discusión con la bancada que presido, en su momento se propuso una fórmula que represente verdaderamente la competencia igualitaria de candidatos sin importar la casilla que ocupen y refleje el verdadero espíritu de abrir los listados permitiendo que la ciudadanía pueda elegir al candidato de su preferencia, por lo tal razono mi voto en contra con respecto a este tema"

De igual forma, como lo he reiterado en diversas ocasiones el presente dictamen no propone aspectos relevantes y solicitados por la población, tales como la paridad y la revocatoria de mandato para cargos de elección popular, así como las últimas propuestas que fueron presentadas por el Tribunal Supremo Electoral, mismo que contenía aspectos que considero deben ser analizados de ser incluidos en la misma para poder abordar una verdadera reforma electoral que reúna todos los aspectos para actualizar el sistema político electoral.



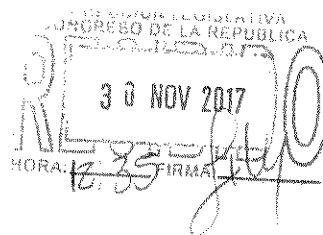
Juan Ramón Lau Quan
Diputado
Congreso de la República

20/80



*Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

130



Of. No. 257-MCQG/cm
Guatemala, 29 de noviembre del 2017

**Licenciado
Luis Eduardo López
Director legislativo
Congreso de la República
Su Despacho**

Señor Director:

Cordialmente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio, adjunto a la presente mi voto razonado discrepante parcial del Dictamen No. 1-2017 de la Comisión de Asuntos Electorales, en el cual se unifican las Iniciativas de Ley 5059 y 5158, que dispone aprobar reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que solicito dicho razonamiento sea tomado en cuenta y siga el proceso correspondiente.

Sin otro particular, le reitero mis muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

**Licda. María Cristina Quinto García
Diputada por el Departamento de Zacapa**




C.c. archivo

VOTO RAZONADO

Fundamento del voto razonado al dictamen No. 1-2017 Comisión de Asuntos Electorales de las iniciativas 5059 y 5158:

En el artículo 27, que reforma el artículo 205 del Decreto 1-95 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, parte conducente, se pretende regular que los distritos donde se eligen más de cinco diputados se dividirán en subdistritos a partir de criterios poblacionales, geográficos y culturales, debiéndose elegir en cada subdistrito un mínimo de tres diputados y que el Tribunal Supremo Electoral debe oficializar la conformación de los subdistritos en la manera que el mismo artículo indica. No obstante el sentido de la figura de los subdistritos es loable, pues permitiría una mayor proximidad e interacción entre el votante y el candidato, se considera que dicha regulación contraviene la Constitución Política de la República de Guatemala, al estimar que, en principio, la carta magna establece en el artículo 224 que el Congreso puede modificar la división administrativa del país, estableciendo cualquier sistema, pero esto, en atención a jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad, puede hacerse "hasta donde lo permitan los límites constitucionales" (sentencias 688-97, 282-87 y 285-87). En ese orden de ideas, en materia electoral se establece taxativamente en el artículo 157 de la carta magna que los diputados serán electos por el sistema de distritos electorales, y que cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral, el municipio de Guatemala forma un distrito y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala.

De esa cuenta, si se pretende modificar el sistema de elección de diputados distritales, debiera hacerse mediante una reforma al artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala citado, y no mediante reforma a una ley constitucional, que jerárquicamente es de rango inferior.


Lcda. María Cristina Quinto García
Diputada por el Departamento de Zacapa
Bloque Frente Convergencia Nacional -FCN-

